

CSI INFORME

CSI, Confederación Sindical Internacional
Septiembre de 2009



Empleo, el camino hacia la recuperación

Cómo el empleo es
fundamental para poner fin a la
crisis mundial

La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la principal organización sindical internacional, que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Cuenta con 312 organizaciones afiliadas en 157 países y territorios, sumando una membresía total de 170 millones de trabajadores de los que el 40% son mujeres.

La CSI es una confederación de centrales sindicales nacionales, cada una de las cuales agrupa los sindicatos en su país. La afiliación está abierta a las organizaciones sindicales, independientes de toda influencia y con una estructura democrática.

Entre sus principales ámbitos de actividad se cuentan: derechos humanos y sindicales, economía, sociedad y lugares de trabajo, igualdad y lucha contra la discriminación, solidaridad internacional.

La CSI defiende los principios de democracia e independencia sindical, según estipulan sus Estatutos.

—
CSI
5 Boulevard du Roi Albert II, Bte1
1210 Bruselas
Bélgica
Teléfono: +322 224 02 11
Fax: +322 201 58 15
E-mail: <mailto:info@ituc-csi.org>
www.ituc-csi.org

Fotografía de portada:

A principios de 2009, la crisis paralizó casi todo en Ucrania. La mayoría de los trabajadores fueron enviados a casa sin sueldo y los que podían trabajar en el mantenimiento, como los albañiles de la cementera Doncement, en la región oriental de Ucrania, se vieron obligados a aceptar una reducción de, por lo menos, el 50 por ciento de su remuneración.

©Fotografía: Anders Lindh para Byggnads (el sindicato sueco de trabajadores de la construcción), Suecia

Empleo, el camino hacia la recuperación

Cómo el empleo es
fundamental para poner
fin a la crisis mundial

Empleo, el camino hacia la recuperación

Cómo el empleo es fundamental para poner fin a la crisis mundial

Índice

Prefacio	7
I. Resumen ejecutivo	9
II. El impacto de la crisis	11
¿Qué salió mal?	11
¿Cuáles son las repercusiones sociales de la crisis?	16
¿Están los gobiernos cumpliendo sus promesas?	24
III. Los sindicatos y la crisis mundial	27
El largo “camino hacia la recuperación” en las Américas	28
Asia-Pacífico: los trabajadores tratan de proteger el empleo y reconstruir la economía	32
África no se ha librado de la recesión económica mundial	33
Recortes, despidos y una agenda social insuficiente afecta a todos en Europa	36
IV. El camino hacia la recuperación: una estrategia sindical para hacer frente a la crisis	42
1. Una recuperación coordinada y un crecimiento más sostenible para el empleo y los ingresos	43
2. Nuevas normas para los mercados financieros mundiales	49
3. Poner fin a la deflación salarial y combatir la crisis de justicia distributiva	53
4. Establecer las bases de un acuerdo internacional para mitigar el cambio climático	54
5. Una gobernanza económica mundial eficaz y responsable	56
Notas	62
Bibliografía seleccionada	65

Prefacio

La crisis económica mundial pone en peligro millones de puestos de trabajo y el futuro de todos los seres humanos. La tasa de desempleo mundial sigue en aumento y seguirá aumentando aun cuando la economía vuelva a mostrar signos de crecimiento. Los salarios están bajo presión, es decir, menor poder adquisitivo y el peligro de una espiral deflacionaria causada por la disminución de los niveles de vida, de la actividad económica y del comercio. Sin embargo, no debe olvidarse que la situación anterior a la crisis ya era dramática en muchos países a causa del aumento de la pobreza y la desigualdad, así como la falta de seguridad alimentaria y energética.

El mundo puede salir transformado de esta crisis y ¿quizás mejor? Pese al extendido clamor de la opinión pública pidiendo un cambio fundamental a medida que la crisis aprieta y se ahonda, la presión para continuar como si nada hubiese pasado, se afianza; Wall Street está concediéndose de nuevo primas astronómicas después de haber sido rescatada con el dinero de los contribuyentes. Parte del sistema de comercialización financiera sigue funcionando en el sector encubierto, u obtiene créditos baratos gracias al dinero de los contribuyentes, los presta a tasas elevadas y se embolsa la diferencia. Evidentemente, siguen abiertas las oportunidades de hacer grandes ganancias: para los más ricos y para unos pocos.

Entre tanto los trabajadores y las trabajadoras padecen no solamente la pérdida de sus puestos de trabajo, sino también una menor protección social, además de las amenazas que pesan sobre sus derechos laborales, con la perspectiva de años de austeridad por delante.

Este informe expone el impacto de la crisis sobre el trabajo y el crecimiento económico, resume los esfuerzos realizados por los sindicatos para luchar contra la crisis y presenta una detallada estrategia sindical que formula propuestas sobre cómo superarla. La actuación de los gobiernos en el plano internacional es vital para acabar con esta profunda crisis a través de la promoción del trabajo decente. Se requieren alternativas que pongan fin a la crisis provocada por un sistema polarizado regido únicamente por el mercado, es decir, una recuperación real basada en la creación de empleo decente, con una regulación adecuada y más gasto público; una recuperación en favor de la economía real y de todos aquellos y aquellas que trabajan en ella.

Los tiempos que se avecinan plantearán numerosos retos a los trabajadores y a sus sindicatos, quienes ya están activos en el seguimiento nacional del Pacto Global para el Empleo aprobado en junio por la Conferencia de la OIT para dar la respuesta necesaria en el ámbito del trabajo decente a la crisis. Los dirigentes sindicales están planteando sus ideas y exigencias al FMI y el Banco Mundial así como al G20 para velar por que las cuestiones relativas al empleo formen parte integrante de un nuevo orden mundial sostenible y socialmente justo. El Día Mundial del Trabajo Decente, el 7 de octubre, sitúa en primer plano la enérgica respuesta sindical internacional a la crisis.

La CSI debe ser una protagonista fuerte, capaz de afirmar su presencia y de hacerse oír para poner fin a la crisis y velar por que una vez terminada se cumplan sus objetivos y principios en pos de un mundo más justo y sostenible. Este informe es parte de nuestro trabajo para cumplir con esa responsabilidad.

Guy Ryder, Secretario General de la CSI

A handwritten signature in black ink that reads "Guy Ryder". The signature is written in a cursive, flowing style with a checkmark-like flourish at the end of the name.

I. Resumen ejecutivo: las soluciones a la crisis

En respuesta a esta crisis económica mundial, la más grave desde la Gran Depresión, el mundo tiene que establecer un nuevo modelo de desarrollo económico que sea económicamente eficiente, socialmente justo y ambientalmente sostenible. Este modelo debe reequilibrar la economía: la financiera y la economía real, los derechos de los trabajadores y del capital, los países con excedente y con déficit comercial y los países industrializados y en desarrollo. Sobre todo, debe poner fin a las políticas que han generado enormes desigualdades en el curso de las dos últimas décadas.

- **Una recuperación coordinada y un crecimiento más sostenible** en el empleo y los ingresos debe seguir siendo una prioridad para el futuro a fin de asegurar que tenga las máximas repercusiones en las políticas activas del mercado de trabajo, la creación de empleo, la provisión de protección social así como el gasto y los servicios públicos. En la lucha por la recuperación, es crucial que los países de bajos ingresos no se queden atrás y es preciso darles los recursos y el espacio político necesarios para emprender las políticas contracíclicas que permitan salir de la crisis.

- **Nuevas normas para regular los mercados financieros mundiales** son necesarias para ayudar a restaurar la confianza en los bancos y en la economía real así como mantener el control público y la supervisión de todas las instituciones, productos y transacciones financieros. Esta regulación debe ir más allá del sistema financiero y abarcar áreas como la regulación de las pensiones, la protección del consumo de los hogares así como la financiación social y poner fin a la economía financiera “sumergida” y a los paraísos fiscales y regulatorios en los que se basa.

- **Poner fin a la deflación salarial y a la desigualdad** con el fin de evitar un mayor deterioro de las condiciones del mercado de trabajo. Los tiempos de crisis no permiten seguir políticas que debiliten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y aumenten la precariedad del empleo. En cambio, deben establecerse valores mínimos decentes en los mercados de trabajo a través del diálogo social con el fin de evitar una espiral descendente de los salarios y poner alto a un aumento de las desigualdades.

- **Un nuevo trato verde impulsará la recuperación económica y el empleo** a través de inversiones a gran escala y gran intensidad de mano de obra en infraestructura verde, como la eficiencia energética, las energías renovables y el transporte y también ayudará a lograr un acuerdo internacional para mitigar el cambio climático que permita un desarrollo con bajas emisiones de carbono en los países en desarrollo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo a través de un “programa de economía verde”.

● **Una gobernanza económica mundial eficaz y responsable** es necesaria para que sitúe el empleo y los ingresos en el centro de los esfuerzos de recuperación económica. Tenemos que imponer el programa de trabajo decente de la OIT como eje de las instituciones económicas y sociales internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE así como en el de una carta mundial para una actividad económica sostenible basada en los principios generales de las políticas laborales, sociales, medioambientales y de desarrollo. El movimiento sindical está dispuesto a participar tanto en el plano nacional como internacional en este nuevo modelo para hacer frente a la crisis y construir una economía mundial más justa para las generaciones futuras.

Los sindicatos han criticado reiteradamente el desequilibrio existente en cuanto a la prioridad relativa concedida a las instituciones económicas y sociales, así como la creciente preponderancia de mercados financieros desregulados e incontrolables. Ya es demasiado tarde para reiterar una vez más nuestras advertencias, ahora más bien debemos concentrarnos en ayudar a la economía real a atravesar uno de los períodos más difíciles de su historia.

II. El impacto de la crisis

Aquello que comenzó como una crisis hipotecaria y crediticia en los Estados Unidos a mediados de 2007 y se propagó rápidamente a través de un sistema financiero no regulado, se ha convertido ahora en una crisis económica a escala mundial, la peor que se ha conocido desde la Gran Depresión, con repercusiones sin precedentes para el mercado de trabajo y el crecimiento económico. En la medida en que la economía mundial sigue deteriorándose, las víctimas inocentes de la crisis, las mujeres y los hombres que trabajan y sus familias, están perdiendo su empleo y sus ingresos.

Este capítulo analiza por qué las políticas del libre mercado no consiguieron fomentar un sistema financiero mundial capaz de mantener la economía real y el trabajo decente. La recesión, el continuo aumento del desempleo y el colapso del comercio mundial han dejado penosamente claro para los dirigentes del mundo que ésta es algo más que una mera crisis “financiera”, que es también una crisis del empleo, de las desigualdades y de la gobernanza mundial.

Para que el mundo del trabajo se recupere de esta crisis, es preciso vincular efectivamente las políticas macroeconómicas y los paquetes de estímulo al empleo y a las políticas sociales. El análisis de las crisis financieras y económicas anteriores nos demuestra que, si bien la recuperación económica se produce a un ritmo más rápido, la recuperación del mercado de trabajo generalmente toma de 3 a 5 años más. Por consiguiente, aun cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé en su publicación *Perspectivas de la economía mundial* de julio de 2009, que la economía mundial está empezando a salir de la recesión¹, los trabajadores y las trabajadoras tienen que prepararse para vivir tiempos difíciles, asumir pérdidas de renta y de pensiones así como un aumento de la economía informal. El aumento del desempleo en sí mismo constituye, además, una gran amenaza para la recuperación.

Los sindicatos han criticado reiteradamente el desequilibrio existente en cuanto a la prioridad relativa concedida a las instituciones económicas y sociales, así como la creciente preponderancia de mercados financieros desregulados e incontrolables en detrimento de las necesidades de financiación de la economía real, socavando su capacidad para proporcionar trabajo decente para todos. Ya es demasiado tarde para reiterar una vez más nuestras advertencias, ahora más bien debemos concentrarnos en ayudar a la economía real a atravesar uno de los períodos más difíciles de su historia.

¿Qué salio mal?

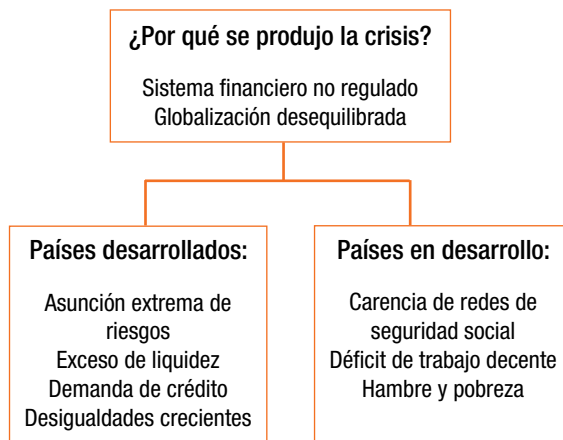
La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué causó el fracaso de los mercados financieros y cómo surgió este colosal reto que se plantea a los líderes del mundo y al mundo del trabajo? ¿No hubo señales de advertencia? En caso de haberlas habido, ¿por qué se pasaron por alto?

El principal origen de la crisis no fue solamente la ideología liberal, la asunción

Se estima que los mercados de valores mundiales han perdido alrededor de 32 billones de dólares estadounidenses de su valor desde que alcanzó su punto de descenso más bajo, lo que equivale al PIB acumulado de los países del G7 para el año 2008.

de riesgos y el exceso de liquidez y fondos de inversión, sino también el aumento de los desequilibrios económicos y sociales, la insuficiencia del gasto social, poca o ninguna protección social y una erosión de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras durante las dos últimas décadas. Aun así, todos estos factores no explican cómo la desregulación financiera en los Estados Unidos pudo convertirse en una crisis económica capaz de engullirlo todo en el plazo de 18 meses. La crisis se originó en los mercados financieros (en la crisis del crédito, la deuda, los derivados y la vivienda) y se convirtió en una crisis económica generalizada generadora de una crisis del empleo, que en numerosos países ha acabado por convertirse en una crisis social y, en algunos lugares, también en una crisis política.

Para desenmarañar el proceso y tratar de arrojar luz acerca de los motivos que han llevado a una intensificación tan rápida de la recesión, tanto en las regiones desarrolladas como en las que se encuentran en desarrollo, el presente informe examina una perspectiva más amplia de la crisis, una crisis que se presenta como el resultado de una globalización desequilibrada. Además, las repercusiones sociales de la crisis están resultando ser enormes y su impacto sobre el empleo, las remesas, la economía informal y el gasto social afecta a todos los habitantes del planeta.



En pos de una ideología del libre mercado

La materialización de la crisis y las múltiples facetas de su complejidad hace difícil definir un área precisa en la que hubiera podido actuarse de diferente manera. Sin embargo, la crisis de hoy día es el resultado de 30 años de neoliberalismo, el cual tiene una fe ciega en las fuerzas del libre mercado y desconfía de las intervenciones del Estado. Casi de la noche a la mañana, el sistema bancario del mundo occidental se derrumbó y se hizo claro el fracaso de las políticas antifiscales y de las políticas contrarias a toda regulación. Se pidió confiar en la superioridad de los mercados libres y no regulados, pero después de la Gran Depresión, se habían establecido nuevas normas y reglamentos para evitar otro colapso económico. En la década de los años 1970, surgió de

El volumen anual de las hipotecas de alto riesgo y otras hipotecas de los EE.UU. aumentó de 160 mil millones de dólares en 2001 a más de 600 mil millones de dólares en 2006.

nuevo la creencia en un mercado plenamente eficiente capaz de corregirse por sí solo en caso de producirse alteraciones, como las burbujas de precios. Sin embargo, el “consenso de Washington” relativo a la liberalización del comercio, la privatización y la desregulación, que hemos presenciado en las últimas décadas, no ha traído la prosperidad para todos, sino que ha privado al mercado de trabajo de los derechos y la protección de los trabajadores y las trabajadoras, ha recortado el gasto público para la educación, la formación y la sanidad y ha concedido reducciones de impuestos a los más acaudalados.

Varios analistas, comentaristas y políticos, como Joseph E. Stiglitz y Kevin Rudd, Primer Ministro de Australia, han señalado una decisión grave que ha de ser considerada como una de las causas profundas de la crisis, es decir, la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999². Esta ley fue promulgada en 1933 a raíz de la Gran Depresión por el Presidente Roosevelt para evitar la participación de los bancos comerciales en una peligrosa especulación y concentrarse exclusivamente en las funciones “tradicionales” de la banca, como los depósitos y la concesión de préstamos. Sin embargo, la banca y la industria de servicios financieros desplegaron un esfuerzo de 300 millones de dólares estadounidenses para ejercer una presión que puso fin a la larga separación que existía entre bancos comerciales y de inversión. De este modo, surgió una oportunidad única para permitir una especulación a gran escala.

La liberalización financiera, conjuntamente con los bajos tipos de interés en los Estados Unidos, sacó a la palestra a algunos de los grandes actores del capitalismo de casino, las instituciones financieras no reguladas, como los fondos de inversión libre, los fondos de capital privado y los agentes hipotecarios con una incontrolable sed de ganancias, que las han llevado a tomar riesgos injustificables en una economía financiera sumergida. Así, a la par de una nueva clase de prestatarios con un historial crediticio poco sólido, un mercado inmobiliario y uno crediticio altamente endeudados ejercieron una enorme presión sobre el sistema bancario. A nivel internacional, las hipotecas de alto riesgo o “sub-primes” provocaron un colapso en los mercados de derivados de crédito, que se extendieron durante la última década sin el control regulador de las autoridades públicas.

La CSI y la Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la OCDE advirtió en su Declaración a la Cumbre del G8 en Heiligendamn, en junio de 2007, sobre los riesgos sistémicos para la estabilidad del mercado financiero que se veían agravados por la opacidad con un alto grado de apalancamiento con el que estaban operando estos inversores. El mecanismo internacional destinado a supervisar y regular los riesgos bancarios, conocido como directrices de Basilea II, no estaba funcionando correctamente porque los inversores encontraron la manera de eludir las normas, razón por la cual las organizaciones sindicales reclamaron un nuevo acuerdo “Basilea III” para incluir el sector no bancario³. En 2003, la Agrupación Global Unions ya había señalado la urgencia de instaurar una mejor regulación de los mercados financieros internacionales en el contexto del descenso del mercado bursátil y la inestabilidad cambiaria⁴. Durante años, el movimiento sindical internacional hizo sonar la voz de alarma

Las estimaciones de las pérdidas experimentadas por las instituciones financieras oscilan entre 1 billón y 2 billones de dólares estadounidenses.

con respecto a la crisis del capitalismo de hegemonía financiera, que se negaba a dar crédito a las actividades productivas y se dedicaba a la especulación improductiva. Aunque esta crisis fue provocada por la codicia y la incompetencia del sector financiero, se sustenta en las políticas de privatización, liberalización y desregulación del mercado de trabajo de las últimas décadas.

Creciente desigualdad de ingresos

Según el último Informe sobre El Trabajo en el Mundo de la OIT, el período de crecimiento económico entre los años 1990 y 2007 no benefició a todas las personas de igual manera en lo que se refiere a un aumento del empleo. De hecho, el crecimiento se produjo con una redistribución de ingresos al margen de la mano de obra y en 51 de los 73 países examinados, la proporción de los salarios con respecto a los ingresos totales disminuyó en el curso de las dos últimas décadas⁵. Durante el mismo período, los ingresos de los hogares más ricos aumentaron en relación con los de los hogares más pobres. La diferencia entre el 10 por ciento de los asalariados con ingresos más altos y el 10 por ciento con los más bajos aumentó un 70 por ciento en los países analizados por la OIT. Así, aun antes de la crisis, la desigualdad de ingresos había aumentado tanto en el seno de cada país como entre los distintos países. Esta brecha en los ingresos representó un factor capital en el colapso económico y determinó el alcance tan amplio de sus repercusiones.

El efecto de la globalización sobre el empleo, los mercados de trabajo y los salarios es la causa principal del aumento de las desigualdades. Ha contribuido al proceso de reducción de efectivos y de deslocalización de industrias, provocando un aumento del número de despidos por razones económicas y pérdidas involuntarias de empleos permanentes. Además, el proceso de globalización financiera, junto con los flujos de capital y la desregulación, influyeron en el aumento de la desigualdad de los ingresos, no sólo a nivel mundial, sino también entre la remuneración de ejecutivos y directores y el trabajador medio. En los Estados Unidos, por ejemplo:

- Los 50 mejores gestores de fondos de inversión libre y de capital privado ganaron una media de 588 millones de dólares cada uno (19.000 veces el salario del trabajador normal).
- En 2007, las cinco mayores empresas de Wall Street pagaron primas (bonus) por un valor de 39 millones de dólares (los mismos bancos que más tarde recibieron un rescate financiero).
- El gerente ejecutivo promedio de las 15 mayores empresas de EE.UU. percibieron un sueldo más de 500 veces superior al de un trabajador promedio estadounidense.
- Entre 2003 y 2007, la remuneración de los gerentes ejecutivos aumentó en términos reales un total del 45 por ciento en comparación con menos del 3 por ciento para el trabajador promedio estadounidense.
- Los directores generales (CEO) de Hong Kong y Sudáfrica reciben entre 160 y 104 veces el salario de un trabajador promedio.

Fuente: IIEL (2008) y Rudd (2009)

En lugar de un crecimiento económico constante basado en la inversión, la productividad y la prosperidad creciente de los trabajadores y trabajadoras, hemos tenido una serie de burbujas especulativas que enriquecieron a unos pocos, pero que ahora están siendo pagadas por la mayoría.

En los países en desarrollo, incluso antes de la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008 y la actual crisis financiera, el Banco Mundial señaló que en 46 de 59 países en desarrollo examinados, la desigualdad había aumentado durante la década anterior. La agravación de la situación económica, a la que vino a añadirse la crisis alimentaria, acentuará aún más las desigualdades existentes. En lugar de un crecimiento económico constante basado en la inversión, la productividad y la prosperidad creciente de los trabajadores y trabajadoras, hemos tenido una serie de burbujas especulativas que enriquecieron a unos pocos, pero que ahora están siendo pagadas por la mayoría.

Erosión de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras

Durante los últimos 25 años, en la mayoría de las economías, la “flexibilización” de los mercados de trabajo ha incrementado el riesgo de deflación de los salarios, debilitado la protección de los trabajadores y aumentado la precariedad del trabajo. En nuestro mundo globalizado, la competencia en pos de inversiones y beneficios se ha incrementado enormemente, la mayoría de las veces basada en costes laborales comparativamente bajos a expensas de las normas fundamentales del trabajo. Esta estrategia denominada “carrera hacia abajo” ha seguido erosionando con el tiempo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y ahora el movimiento sindical teme que la crisis económica mundial menoscabe aún más la legislación laboral, la libertad de sindicalización, el derecho al diálogo social y la negociación colectiva, lo que representaría un importante revés a la lucha por el trabajo decente para todos y la eliminación de la pobreza. Otra de las preocupaciones se refiere a los trabajadores y trabajadoras ocasionales, temporales y subcontratados, muchos de ellos migrantes, que se encuentran entre los más vulnerables a la pérdida de su empleo y, a menudo, no pueden acogerse a las indemnizaciones por despido o a las prestaciones de desempleo si pierden su trabajo. Más grave aún, la OIT señala que se observa un número creciente de prácticas inescrupulosas, fraudulentas y delictivas que llevan a las personas a situaciones de trabajo forzoso y que los impactos negativos de la crisis económica y el empleo obstaculizan todo intento de eliminarlas⁶.

La desregulación financiera ha desviado los recursos económicos de la inversión destinada a fomentar la productividad de la economía real y de las personas, lo que se refleja en cierta medida en el desequilibrio de poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Además, una gobernanza del mercado de trabajo relativamente débil en numerosos países en desarrollo (una reducida tasa de cobertura de la negociación colectiva) realmente puede poner aún más en riesgo la posibilidad de llegar a soluciones negociadas a favor de los trabajadores y de los salarios en estos tiempos de crisis. No obstante, la crisis y las medidas necesarias para hacerle frente no deben ni pueden esgrimirse como excusa para socavar los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Impacto de la crisis económica en las mujeres

Un nuevo informe de la CSI revela que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo podría ser mucho mayor que las cifras oficiales proporcionadas por los gobiernos. El informe, “(Des)igualdad de género en el mercado laboral”, se basa en los resultados de una encuesta realizada entre 300.000 mujeres y hombres de 20 países distintos y sitúa la brecha salarial mundial en un 22%, en relación con el 16,5% obtenido a partir de las cifras oficiales de los gobiernos.

El informe examina asimismo el impacto de la recesión económica en las posibilidades de las mujeres de tener un empleo y contar con ingresos. Las crisis anteriores tuvieron consecuencias especialmente negativas para las mujeres de los países en desarrollo empleadas en los sectores industriales de la exportación y de la agricultura. Los recortes en gastos en sanidad, protección social y educación por parte de los gobiernos suelen afectar también más a las mujeres. Asimismo, el informe pone de relieve la necesidad de prestar especial atención a los impactos que tienen las respuestas políticas sobre las mujeres, en el contexto de las medidas gubernamentales tomadas para abordar la actual crisis. “La tendencia mundial a reemplazar el empleo regular por el trabajo de subcontratación y de agencia también ha afectado de manera particular a las mujeres, y estos puestos de trabajo precario son los primeros en desaparecer cuando los empleadores reducen la plantilla debido a la recesión mundial. Miles de millones de mujeres que trabajan en el servicio doméstico y como trabajadoras migrantes se enfrentan a perder o han perdido sus puestos de trabajo, con lo que hogares de todo el mundo, que ya están pasando apuros, se ven especialmente afectados por esta situación”, afirmó Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

¿Cuáles son las repercusiones sociales de la crisis?

Desaceleración económica

La crisis ha frenado el crecimiento económico desde mediados de la década de los años 1990 y las economías avanzadas ya han estado experimentando un crecimiento negativo. Las últimas previsiones del FMI prevén que la actividad económica mundial se expandirá un 2,5 por ciento en 2010 después de contraerse un 1,4 por ciento en 2009. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo experimentaron una tasa de crecimiento del 8,3 por ciento en 2007, pero en 2009, el ritmo del crecimiento económico descendió al 1,5 por ciento. China y la India, dos de las economías de más rápido crecimiento, experimentaron una desaceleración, y su crecimiento descendió del 13,0 y el 9,4 por ciento respectivamente en 2007 al 7,5 y el 5,4 por ciento en 2009. Entre las economías nacionales más importantes, se considera que el caso más grave es el de México, cuyo PIB experimentó una contracción del 7,3 por ciento en 2009, debido en parte a la desaceleración del comercio mundial⁷. Los países de bajo ingreso se enfrentan a numerosos retos, porque es probable que disminuya la ayuda oficial y esas economías son particularmente vulnerables a la oscilación de los precios, como ya lo demostró la crisis alimentaria. La inversión extranjera directa (IED) ha contribuido de manera importante al crecimiento de numerosas economías de Asia y África,

2009 será el año que presente los peores resultados globales nunca antes registrados en términos de creación de empleo.

pero en conjunto, según cálculos conservadores, es probable que la inversión extranjera directa disminuya más de un 30 por ciento en los países en desarrollo en 2009. Teniendo en cuenta el hecho de que la actividad mundial también debe contraerse en forma considerable en 2009, es inevitable que la tasa de desempleo siga aumentando.

Graves consecuencias para los trabajadores debido al acuerdo de rescate del FMI

Durante un par de años, los tres Estados bálticos experimentaron un crecimiento impresionante en comparación con los demás países de la UE. Ahora, son los que más sufren. Con el fin de salvar la economía, Letonia se vio obligada a solicitar crédito al FMI y a aceptar sus condiciones. Después de caer en una profunda recesión, a finales de 2008, Letonia buscaba desesperadamente fondos para cubrir un creciente déficit presupuestario. En diciembre de 2008, un grupo de prestamistas internacionales prometió a Letonia 7,5 mil millones de euros (10,5 mil millones de dólares). Las condiciones del rescate del FMI y la Comisión Europea exigen al país limitar su déficit presupuestario al 5 por ciento del producto interno bruto y aplicar reformas estructurales.

Con los recortes presupuestarios, la población letona ve cómo se reducen los salarios y disminuyen las garantías sociales. El gobierno, a la vez que se muestra frugal con sus propios nacionales, se vio obligado a intervenir y rescatar al segundo banco más importante de Letonia, el Banco Parex, a fin de restablecer la confianza en el sector financiero.

En diciembre de 2008, los sueldos de los funcionarios públicos fueron reducidos por lo menos un 15 por ciento. Los docentes y los trabajadores sanitarios se están viendo afectados por una gran reforma estructural y se planea cerrar docenas de escuelas y centros sanitarios como parte de las medidas de recorte de gastos destinadas a reducir el déficit presupuestario de Letonia. El gobierno prevé recortes salariales adicionales de un 20 por ciento en junio de 2009 y las reducciones en el presupuesto de la educación ascienden a 25 millones de lats letones. El presupuesto para la sanidad experimentará recortes por un valor de 40 millones de lats, lo que inevitablemente provocará miles de despidos, según la Confederación de Sindicatos Libres de Letonia (LBAS).

Por el momento, Letonia tiene la segunda tasa de desempleo más elevada en la UE, sólo superada por España, y la LBAS teme que el préstamo del FMI y las condiciones que conlleva compriman sectores como la industria y la agricultura y provoquen una tensión social cada vez más aguda entre los ciudadanos, los docentes, los trabajadores sanitarios y de la industria.

Fuente: CSI - Visión Sindical - Letonia (de próxima publicación)

Aumento del desempleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que probablemente se sumen al número de desempleados 59 millones de personas más en 2009 que en 2007 y que el número total de personas sin empleo podría alcanzar los 239 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, lo que equivale

El desempleo en EE.UU.

Los Estados Unidos fue el primer país en verse afectado por la recesión, la contracción del crédito y la subsiguiente baja en el mercado de trabajo, lo que causó que el número de desempleados de larga duración (sin trabajo durante más de 27 semanas) se triplicara a partir de diciembre de 2007. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la pérdida de puestos de trabajo tuvo lugar en casi todos los sectores industriales y siendo moderada en la construcción y la venta al por menor:

“El empleo en las empresas de transformación perdió 156.000 puestos de trabajo en mayo [...]”

En la construcción, la contracción del empleo ascendió a 59.000 puestos de trabajo durante el mes de mayo, en comparación con una media mensual de 117.000 menos en la industria durante los últimos seis meses [...] La contracción del empleo en los servicios profesionales y comerciales se mostró moderada durante el mes de mayo, con una pérdida de 51.000 puestos de trabajo [...] El empleo en el comercio minorista se redujo en 18.000 puestos de trabajo el mes de mayo; los recortes de empleo en el comercio minorista se han frenado notablemente en los últimos dos meses.^{11”}

Fuente: AFL-CIO: U.S. Unemployment Rate now 9.4 Percent by Tula Connell, 8 de junio de 2009

a una tasa de desempleo del 7,4 por ciento⁸. La OIT ha analizado los datos desde 1991, año que representa aproximadamente el inicio de una economía mundial más integrada, y resulta claro que 2009 será el año que presente los peores resultados globales nunca antes registrados en términos de creación de empleo.

Cuando se cierran fábricas en Asia debido a la baja de la demanda en el mundo occidental, el regreso de millones de trabajadores y trabajadoras a las zonas rurales de donde proceden afecta a los medios de subsistencia de sus familias, pero también provoca una fuerte disminución del PIB de los países que reciben las remesas. En los primeros tiempos de la crisis financiera, se pensaba que el impacto en África sería mínimo debido a su escasa integración en la economía mundial. Sin embargo, “en un mundo globalizado, los problemas de una parte del sistema rápidamente resuenan en el resto”⁹. La crisis puede echar atrás lo ganado gracias al rendimiento económico y socavar las perspectivas de las personas de superar la pobreza mediante puestos de trabajo decente. Asimismo, es probable que los progresos realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) den marcha atrás de manera sustancial¹⁰.

Tasa de desempleo. Mundo y regiones (en porcentajes)

Total	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mundo	6.4	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.3	6.0	5.7	5.9	7.4
Economías desarrolladas y Unión Europea	6.9	6.6	6.7	7.3	7.3	7.1	6.8	6.3	5.7	6.1	9.0
Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI	12.7	10.8	10.3	10.1	10.1	9.9	9.4	9.1	8.4	9.0	12.1
Asia Oriental	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.0	3.9	4.3	5.8
Asia Sudoriental y el Pacífico	5.1	5.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.4	6.0	5.4	5.4	6.2
Asia Meridional	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0	5.6
América Latina y el Caribe	8.7	8.6	8.9	9.1	9.1	8.5	8.1	7.4	7.1	7.2	8.4
Oriente Medio	10.0	9.5	10.9	10.8	12.1	9.2	9.8	10.1	9.5	9.0	11.0
África del Norte	13.3	14.1	13.6	13.4	13.1	12.3	11.5	10.5	10.6	10.0	11.1
África Subsahariana	7.9	7.9	8.1	8.1	8.2	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	8.2

Fuente: OIT, Modelos Económicos de Tendencias, mayo de 2009

Datos clave de la OIT:

- En las Economías desarrolladas y en la Unión Europea (UE), se prevé que el empleo total se contraiga este año entre un 1,3 y 2,7 por ciento. Es probable que la región represente entre el 35 y 40 por ciento del aumento total del desempleo a nivel global, si bien constituye menos del 16 por ciento del total de la fuerza laboral a nivel mundial.
- En Europa Central y Sudoriental (países no miembros de la UE) y los países CEI, el número de desempleados podría aumentar en hasta el 35 por ciento en 2009. Se espera que el empleo total se reduzca entre 1 y 2,8 por ciento.
- En Asia Oriental, se estima que al comienzo de la crisis había 267 millones de personas –que representan más de un tercio del total de trabajadores que viven con menos de 2 dólares por día. Había además cerca de 12 veces mayor número de personas con empleos vulnerables que sin empleo.
- En Asia Sudoriental y el Pacífico, se prevé un aumento bastante moderado en el nivel de desempleo, si bien los trabajadores y las empresas en industrias orientadas a la exportación se han visto muy afectados.
- En Asia Meridional el desempleo se aproxima al 5 por ciento, si bien cerca de 15 veces mayor número de trabajadores tienen trabajos vulnerables. Se prevé que el número de trabajadores que viven con menos de dos dólares al día aumente en hasta 58 millones entre 2007 y 2009.
- En América Latina, se prevé que la tasa de desempleo aumente de 7,1 por ciento en 2007 a entre un 8,4 y 9, 2 por ciento en 2009.
- La OIT proyecta un aumento del desempleo en Medio Oriente de hasta un 25 por ciento en 2009, comparado con 2007, y del 13 por ciento para África del Norte en igual periodo. Se espera que ambas regiones experimenten un aumento del empleo vulnerable. Alrededor de 1 de cada 3 trabajadores en estas dos regiones es un trabajador vulnerable. Se espera que esta proporción aumente a 4 por cada 10.
- En el África Subsahariana, cerca del 73 por ciento de los trabajadores de la región tienen empleos vulnerables, y esta cifra podría aumentar hasta más del 77 por ciento en 2009. La crisis y la posible reducción de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) plantean una seria amenaza a las inversiones en infraestructura y bienes de capital, que son cruciales para el desarrollo de la región.
- Más de 200 millones de trabajadores podrían verse relegados a una situación de extrema pobreza, principalmente en aquellos países en desarrollo y emergentes donde existen pocas o ninguna red de seguridad social, con el resultado de que el número de trabajadores pobres puede aumentar a 1,4 mil millones.

Fuente: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-es/WCMS_106527/index.htm

En la industria textil, el vestido y el calzado se perdieron más de once millones de puestos de trabajo en los últimos nueve meses y otros tres millones se encuentran en la cuerda floja, según la Federación Internacional de Trabajadores

La brecha salarial de género puede ahondarse debido a la crisis

Los sindicatos australianos están preocupados ante la posibilidad de que la brecha ya existente entre la remuneración de los hombres y las mujeres sea aún más grande tras la decisión de julio de 2009 de congelar el salario mínimo. ACTU ha informado que el número de mujeres es excesivamente elevado entre los bajos salarios y el empleo a tiempo parcial: casi un tercio de las mujeres ganan menos que el salario mínimo federal. La desafortunada decisión de congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de bajos salarios agravará la desigualdad.

del Textil, Vestuario y Cuero (FITTV), miembro de la Agrupación Global Unions, que representa a los trabajadores y trabajadoras en estos sectores.

En China, las pérdidas de empleo debido a los cierres de fábricas a gran escala, no sólo a causa de la crisis, sino también debido a la reestructuración industrial con miras a una producción de mayor valor añadido que tuvo lugar antes de la crisis, han provocado la vuelta a su lugar de origen de más de 20 millones de los trabajadores y trabajadoras despedidos a causa de las reducciones de personal para buscar empleo en el sector rural. Durante los dos últimos meses de 2008, los despidos en Indonesia superaron los 40.000 trabajadores, principalmente en los sectores de la electrónica y la transformación. La disminución de puestos de trabajo en la industria de la transformación ha ascendido a de 120.000 en Filipinas y 20.000 en Singapur¹².

El desempleo de larga duración puede resultar, en última instancia, más costoso para la sociedad en su conjunto que el choque inicial de la crisis financiera debido a que un determinado número de trabajadores y trabajadoras deberán reciclarse para volver a integrarse al mercado de trabajo, otros podrían no regresar nunca a causa de la desesperanza o la imposibilidad de encontrar trabajo y aquellos que inicialmente recibían prestaciones por desempleo en la fase inicial de la pérdida del empleo podrían ya no depender del sistema social al cabo de un cierto período de tiempo. En promedio, después de la recuperación de la actividad económica, son necesarios de tres a cinco años para que el mercado de trabajo recupere su nivel normal. Al mismo tiempo, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son objeto de una presión económica que provoca un aumento de bancarrotas, lo que inevitablemente conducirá a una escasez de nuevas oportunidades de empleo. Según el Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEI), en los próximos cinco años tendrían que crearse más de 300 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo para mantener el nivel de empleo anterior a la crisis¹³.

Menor poder adquisitivo – erosión del ahorro de los particulares

Millones de personas han visto su pensión, los ahorros de toda su vida, su vivienda y su puesto de trabajo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El efecto inmediato de los despidos de personal es una verdadera reducción de ingreso que afecta a la salud y la cobertura de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias y ejerce una presión adicional sobre los presupuestos públicos. A semejanza de ondas en el agua, los efectos de la crisis del mundo financiero se extendieron rápidamente al mundo del trabajo y otros sectores, donde lo más frecuente es que sean los trabajadores poco cualificados los más afectados por los despidos de personal. A menudo experimentan grandes dificultades para encontrar un nuevo empleo y las repercusiones económicas y sociales del desempleo suelen sentirse con mayor severidad en los hogares de ingresos medios o bajos.

La pronunciada caída de la demanda y el hecho de que los consumidores estén gastando menos debido a la crisis afectan a la industria de la exportación y a

Presión sobre los trabajadores y trabajadoras australianos:

Una congelación salarial de los trabajadores que cobran el salario mínimo afectará a más de 1,3 millón de trabajadores y trabajadoras que ya se encuentran en la parte inferior de la escala salarial y se hará a expensas de las condiciones de vida y del poder de compra de las familias trabajadoras. La remuneración de los ejecutivos y otras personas que perciben un alto ingreso no se ve afectada por la decisión de la Comisión Salarial Australiana, vigente a partir de julio de 2009. Más bien son los trabajadores y trabajadoras de bajos salarios quienes perderán el próximo año 16 dólares australianos por semana.

la demanda de mano de obra, especialmente en Asia, las Américas y Europa. En febrero de 2009, las exportaciones de China se redujeron casi un 26 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones de Indonesia se contrajeron alrededor del 33 por ciento¹⁴. En un intento por minimizar las pérdidas financieras, numerosas empresas, fábricas y firmas han intentado diversas soluciones. Algunas de ellas están reduciendo el horario de trabajo de sus trabajadores o les piden que tomen licencia no remunerada.

Según la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, entre 2001 y 2007, un período de enorme crecimiento económico, el promedio anual de los salarios reales en algunas partes de la región aumentó a una tasa del 1,8 por ciento, muy por debajo de la media anual de crecimiento de la productividad laboral durante el mismo período¹⁵. Aun antes de la crisis, la proporción de los salarios en la renta nacional ha ido reduciéndose en muchos países durante los últimos años. La desaceleración económica está ejerciendo una presión adicional sobre la remuneración de los trabajadores y los salarios pueden permanecer estancados, o incluso descender en los próximos meses. Una evolución preocupante, porque la clave para la recuperación de la crisis es conservar el poder adquisitivo de la población y la demanda de los consumidores manteniendo los salarios a un nivel decente. Sin embargo, en un plano general, numerosos trabajadores y trabajadoras ya han acordado aceptar modestos aumentos salariales, o ninguno, a fin de salvar a su empleador y sus puestos de trabajo. La tendencia a aplicar una congelación salarial generalizada a toda la economía no haría sino agravar la recesión.

Numerosos trabajadores y trabajadoras que han trabajado duramente toda su vida y ahorrado para su jubilación han sido espectadores pasivos de la deterioración de su ahorro destinado a su pensión como consecuencia de la crisis financiera y sus instrumentos de riesgo para generar ganancias rápidas. Numerosos programas y fondos de pensiones están ligados al comportamiento de la bolsa de valores, la cual ha caído a su vez en picado desde 2008, con graves efectos negativos sobre los fondos de pensiones de los trabajadores. En Estados Unidos, el valor de los planes de pensiones perdió aproximadamente un 15 por ciento de su valor en 2008, o según la Reserva Federal, la pérdida de valor asciende a 1 billón de dólares estadounidenses desde el segundo trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2008¹⁶. Tal erosión de las pensiones de los ciudadanos tiene graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad financiera de los trabajadores y trabajadoras que se acercan a la edad de la jubilación. Es de vital importancia que la seguridad de las pensiones y el derecho a una pensión digna, adecuada y previsible figure prioritariamente en los planes de recuperación económica, ya que la crisis mundial ha puesto de manifiesto los peligros que entrañan los planes de pensiones de contribuciones definidas no protegidos, cuyos riesgos son asumidos esencialmente, o en su totalidad, por los trabajadores¹⁷.

La crisis afecta particularmente a las mujeres, quienes ven cómo su trabajo, ya de por sí mal retribuido, se evapora a consecuencia de la recesión económica, dejándolas sin ingresos de compensación social para asumir la

Presión sobre los trabajadores y trabajadoras australianos:

Una congelación salarial de los trabajadores que cobran el salario mínimo afectará a más de 1,3 millón de trabajadores y trabajadoras que ya se encuentran en la parte inferior de la escala salarial y se hará a expensas de las condiciones de vida y del poder de compra de las familias trabajadoras. La remuneración de los ejecutivos y otras personas que perciben un alto ingreso no se ve afectada por la decisión de la Comisión Salarial Australiana, vigente a partir de julio de 2009. Más bien son los trabajadores y trabajadoras de bajos salarios quienes perderán el próximo año 16 dólares australianos por semana.

carga del cuidado del hogar y la familia. Las mujeres son a menudo el pilar de las industrias que se han visto afectadas negativamente por la caída de la demanda. Los servicios, la fabricación para la exportación y la confección de prendas de vestir son sectores que emplean aproximadamente un 60-80 por ciento de trabajadoras y el Banco Mundial estima que estos sectores se contraerán considerablemente en los próximos meses. Estas industrias suelen contratar a las mujeres con bajos salarios y ofrecerles puestos de trabajo poco cualificados y temporales con muy pocos derechos, lo que ahora sitúa a estas trabajadoras en la zona de riesgo debido a la crisis¹⁸.

Economía informal más importante

La calidad de los puestos de trabajo así como la calidad de vida declinan debido a la crisis. En algunos países en desarrollo, hasta el 60 por ciento de la mano de obra trabaja en el sector informal, sin contratos por escrito ni seguridad social¹⁹. En India, por ejemplo, la tasa oficial de desempleo en 2005 fue del 4,7 por ciento, pero el 83 por ciento de los trabajadores no agrícolas pertenecían a la economía informal, tenían puestos de trabajo, pero sin beneficiarse de la protección del empleo, el seguro de desempleo ni del derecho de pensión, ni de condiciones de trabajo seguras y sanas. Todo progreso logrado para reducir la economía informal se ve amenazado por la crisis, ya que se están perdiendo millones de empleos en el sector formal.

La actual crisis económica mundial puede provocar un aumento del empleo vulnerable e informal en las zonas rurales, debido a la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, lo que dará como resultado el deterioro de las condiciones de trabajo y salarios más bajos para los más pobres. Esta situación es particularmente preocupante en las economías emergentes y en desarrollo, ya que privará a millones de trabajadores y trabajadoras de toda esperanza de llegar a acceder a un empleo en el sector formal. Por el contrario, aumentará la actual proporción de trabajadores en ocupaciones en condiciones peligrosas y en empleo precario. Los trabajadores que continúan ocupando un empleo deberán hacer frente a un deterioro de las condiciones de trabajo. Las trabajadoras probablemente tendrán que trabajar sin gozar de licencia remunerada ni seguridad social en algunas partes de Asia y América Latina²⁰. Y la crisis económica mundial tiende a agravar esta situación.

En numerosos países en desarrollo no existen medidas de protección social para amortiguar las repercusiones y la angustia de la pérdida de ingreso debido al desempleo y, desde luego, tampoco existen para la mayoría de las mujeres y los hombres que trabajan en condiciones precarias, con empleos informales de bajo ingreso y no protegidos. El 80 por ciento de la población mundial no cuenta con ninguna red de seguridad social que pueda ayudarle en caso de que su ingreso se evapore a causa de la pérdida de su puesto de trabajo, y probablemente se vea obligada a aceptar cualquier tipo de empleo aunque sea peligroso, mal remunerado o de corta duración.

El impacto de la crisis sobre la prevención y tratamiento del VIH

La crisis financiera y económica ha empezado a afectar a la respuesta de los gobiernos al VIH/SIDA. India redujo recientemente su partida presupuestaria destinada al SIDA para el ejercicio en curso. Un reciente análisis realizado por ONUSIDA y el Banco Mundial muestra que en algunos de los países más afectados por la infección, los programas de tratamiento están resintiéndose las consecuencias de los recortes presupuestarios. Más de 3,4 millones de personas que viven con el VIH pueden verse afectadas y las perspectivas para los 7 millones de personas que necesitan tratamiento, pero que no tienen acceso al mismo, son desalentadoras.

Fuente: ONUSIDA, 2nd Newsletter/09

Menos gasto social

Muchos gobiernos son conscientes de las consecuencias potencialmente graves que van a producir los recortes en los servicios públicos o en el gasto social sobre las capas más vulnerables de la población, en su mayoría mujeres y niños. En la medida en que el ingreso baje y el déficit aumente, se verán afectadas las redes de seguridad social, las prestaciones en metálico, la escolaridad de los niños y a numerosas capas vulnerables de la población. Según la OIT, la educación y la formación también pueden verse afectadas, en particular en los países en desarrollo, porque las niñas y los niños abandonan la escuela para contribuir a los ingresos del hogar, o porque las familias ya no pueden permitirse financiar la educación debido a la contracción del crédito²¹.

Las crisis anteriores nos han dejado importantes enseñanzas y una de ellas es que los recortes en el gasto destinado al desarrollo social pueden tener efectos a largo plazo sobre los hogares de medio y bajo ingreso, los trabajadores, las personas que viven con una enfermedad y las personas de mayor edad. La crisis que azotó a Asia Oriental en 1997-1998 causó una reducción del 20-30 en los salarios medios de Indonesia y los hogares redujeron su gasto destinado a la atención médica y la educación. Durante la recesión de la década de los años 1990, tanto en Argentina como en México se redujo el gasto social previsto, y el Banco Mundial señala que es común que los gobiernos disminuyan los gastos sociales cuando experimentan un crecimiento bajo o negativo del PIB así como choques macroeconómicos²².

Los datos más recientes del Informe de AidWatch señalan que desde diciembre de 2008, cuatro gobiernos europeos ya han reducido su contribución a la ayuda al desarrollo: Estonia, Irlanda, Italia y Letonia. Según estimaciones oficiales de la Comisión Europea, los 15 Estados miembros más antiguos (UE-15) no alcanzarán su objetivo colectivo del 0,56 por ciento de la renta nacional bruta (RNB) de ayuda para 2010 sino hasta 2012, es decir, con dos años de retraso. Los 12 nuevos Estados miembros (UE-12) también se encuentran a la zaga en este sentido y no se espera que alcancen sus objetivos comunes del 0,17 por ciento a tiempo²³.

Las consecuencias de la recesión económica y la desaceleración del comercio se dejarán sentir en forma de una disminución del ingreso fiscal en todo el mundo. Para los países que dependen en gran medida de la ayuda, las remesas o las exportaciones, el choque a corto plazo y la pesada carga financiera de tipos de interés más altos así como la devaluación de las divisas podría llevarlos a dedicar un menor gasto a los programas de asistencia social, los planes de pensiones, las escuelas y las transferencias de crédito. Sin embargo, a largo plazo, resultará más costoso dejar de invertir en la protección social que tratar de hacer recortes a causa de problemas económicos a corto plazo.

Caída de las remesas

A diferencia de crisis financieras anteriores, la interconexión de ésta con las graves repercusiones sobre el mercado de trabajo y el crecimiento económico

también en los países en desarrollo hace sumamente improbable que un flujo continuo de remesas contribuya a estabilizar a los países receptores. De hecho, los flujos de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes han comenzado a disminuir en todas partes; a nivel mundial disminuirán más de un 7 por ciento. Sin embargo, los fondos que los trabajadores migrantes envían a sus familias son fundamentales para el desarrollo y constituyen más de tres veces el volumen de la ayuda (según el Banco Mundial, 328 mil millones de dólares o aproximadamente el 2 por ciento del PIB de los países en desarrollo)²³. Los salarios de las trabajadoras son una de las fuentes de ingresos más importantes para las familias que dependen de las remesas para poder mantener su sustento, pero las trabajadoras migrantes a menudo son un blanco fácil de empleadores que las explotan para eludir los derechos laborales que les concede la ley²⁵.

Se prevé que las remesas que recibe América Latina disminuirán un 2 por ciento, el primer descenso desde el año 2000, y se observa una tendencia similar en Asia, donde es probable que las remesas disminuyan particularmente en Filipinas y Bangladesh, ya que los trabajadores y trabajadoras migrantes que se encuentran en el Oriente Medio son los que pierden su empleo y, por consiguiente, tendrán que regresar a sus países de origen²⁶.

¿Están los gobiernos cumpliendo sus promesas?

A medida que la crisis financiera se ahondaba, los gobiernos intervinieron para ayudar a sus sistemas financieros y, de hecho, a sus economías en general. Los paquetes de estímulo fiscal y de gasto público comprometidos por más de 40 países de todo el mundo pueden clasificarse en tres tipos: 1) medidas de rescate financiero como garantía de los depósitos privados y préstamos bancarios, inyecciones de capital y compra de activos “tóxicos”; 2) medidas de rescate monetario como los recortes de tipos de interés y 3) medidas de rescate fiscal, por ejemplo, reducciones de impuestos a las empresas y a los consumidores y un mayor gasto en bienes y servicios públicos.

Sin embargo, ¿qué proporción de los paquetes de estímulo se dedicó a invertir en el gasto público y la infraestructura, por ejemplo, para crear empleo y estimular una mayor productividad? Si los gobiernos pretenden restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo, como lo declara el G20 en su Comunicado de la Cumbre de Londres, ¿cómo abordan la cuestión del empleo los diversos estímulos fiscales y medidas a nivel mundial y están introduciendo medidas concretas que sostengan con actos sus palabras? El Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) ha analizado las medidas de rescate fiscal en 10 economías avanzadas y 12 economías en desarrollo y emergentes y encontró que se hace muy poco hincapié en las medidas a favor del empleo y las transferencias sociales a la hora de examinar el panorama general del gasto público (véase el gráfico en la página siguiente).

En el lado positivo, 16 de los 22 países dedicarán una parte de los paquetes de estímulo económico a la infraestructura y los proyectos de obras públicas,

Los salarios de las trabajadoras son una de las fuentes de ingresos más importantes para las familias que dependen de las remesas para poder mantener su sustento, pero las trabajadoras migrantes a menudo son un blanco fácil de empleadores que las explotan para eludir los derechos laborales que les concede la ley.

Composición del gasto público:



Fuente: Datos del IIEL, que muestran la composición del gasto (como porcentaje del paquete total), tomando como base 22 países.

La CSI se muestra preocupada de que los compromisos prometidos en materia de empleo y protección social no se materialicen a causa de que los gobiernos no aporten los recursos necesarios para su aplicación.

lo que debería contribuir a crear puestos de trabajo. Esas medidas han sido hasta ahora tres veces más importantes en los países en desarrollo y las economías emergentes analizadas (46,5 por ciento) en comparación con las economías avanzadas (14,9 por ciento). Incluye un gasto destinado a medidas de estímulo en países como China, Alemania, Japón, Portugal, Arabia Saudita y Estados Unidos en áreas como la construcción y reparación de carreteras, puentes, vías férreas e infraestructura rural, así como proyectos de eficiencia energética. No obstante, medidas de empleo como programas de formación y capacitación, prestaciones de desempleo y creación de empleo sólo implican el 3 por ciento del gasto total entre las economías avanzadas, mientras que los países en desarrollo y las economías emergentes se limitan a gastar el 0,2 por ciento del total de los paquetes fiscales en tales iniciativas a favor del mercado de trabajo²⁷.

Además, estos paquetes de estímulo se acordaron a finales de 2008 o principios de 2009, pero desde entonces, la economía mundial se encuentra considerablemente peor y es muy posible que el gasto resulte insuficiente para contrarrestar la creciente recesión. Aun cuando el FMI ha recomendado un estímulo global que represente el 2 por ciento de la producción mundial, actualmente ese estímulo es solamente del 1,4 por ciento a escala mundial. Además, no está claro a cuánto asciende el gasto antiguo y el nuevo ni cuáles son los plazos para su aplicación. Por último, las medidas de rescate financiero son sustancialmente más cuantiosas que las medidas de rescate fiscal; el Reino Unido ha asignado el 28,6 por ciento de su PIB a su esfuerzo de rescate financiero y sólo el 1,3 por ciento a las medidas de rescate fiscal, al igual que Alemania, que ha asignado el 19,8 por ciento al primero y el 2,8 por ciento al segundo²⁸.

La CSI se muestra preocupada de que los compromisos prometidos en materia de empleo y protección social no se materialicen a causa de que

los gobiernos no aporten los recursos necesarios para su aplicación. La recientemente concluida Cumbre del G8 en julio de 2009 no ofrece fondos adicionales para hacer frente a la elevada y cada vez más importante tasa de desempleo, especialmente si se observa que esa tasa no tiene en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras que han conservado sus puestos de trabajo aceptando empleos a tiempo parcial o tomando licencia no remunerada, ni la modificación de la calidad de los empleos, ni los niveles de subempleo. En cambio, el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, concertado entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores en junio de 2009, debería situarse en el centro del proceso decisorio mundial para romper con las políticas fallidas del libre mercado y velar porque los gobiernos y los empleadores luchen por mantener y crear empleo, evitar espirales salariales deflacionistas así como el empeoramiento de las condiciones de trabajo. El Pacto de la OIT destaca la importancia de los planes públicos para la creación de puestos de trabajo, como por ejemplo el desarrollo de infraestructuras, así como las ayudas para las personas desempleadas y la formación y el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el cometido más importante que aún nos depara el futuro es velar porque haya más acción que palabras.

El desempleo cada vez más importante que se está experimentando a escala mundial no da pie a muchas esperanzas respecto a la recuperación del mercado de trabajo en un futuro próximo. Para dar un impulso a la economía, los líderes y los gobiernos del mundo tendrán que ocuparse de la crisis del empleo, de lo contrario, aquellos que son el corazón de nuestra economía, los trabajadores y las trabajadoras, seguirán siendo los que paguen el precio más alto. El siguiente capítulo muestra la forma en que las organizaciones sindicales están asumiendo el reto y exigen que se les escuche.

III. Los sindicatos y la crisis mundial

En el capítulo I se mostró el impacto sin precedentes de la crisis económica mundial, desconocida para esta generación de trabajadores, sus familias y sus medios de sustento, y del nivel de desempleo más bajo del que se tiene memoria desde la Gran Depresión de la década de los años 1930. Los trabajadores de todo el mundo, de las Américas a Asia, de Bulgaria a Burkina Faso y de Canadá a Colombia, ahora se encuentran ante la realidad de la precariedad de las condiciones de trabajo, las presiones sobre los salarios, el desempleo masivo y la falta generalizada de protección social. El mundo en su conjunto está pagando por una crisis precipitada por la codicia, la especulación irresponsable y las políticas neoliberales.

El siguiente capítulo es un testimonio de la determinación de los sindicatos para luchar contra la crisis y establecer un nuevo orden mundial socialmente justo. Además de que los sindicatos hacen manifestaciones, buscan nuevas propuestas para superar la crisis y movilizan la presión política, que muy claro que la situación no puede continuar como si nada hubiese pasado, según el conocido adagio “business as usual”. El mundo tiene que ser muy diferente una vez que la crisis haya terminado, en el ámbito financiero, pero también en el mercado de trabajo. Este capítulo indica los mensajes y acciones de las organizaciones sindicales de todo el mundo para lograr ese nuevo orden mundial.

El mundo tiene que ser muy diferente una vez que la crisis haya terminado, en el ámbito financiero, pero también en el mercado de trabajo.

CSI: Jornada de acción

En las Economías desarrolladas y en la Unión Europea (UE), se prevé que el En un impulso mundial para que los gobiernos del G20 hagan lo necesario para sacar a la economía mundial de la recesión y perfilen un rumbo nuevo para la creación de puestos de trabajo, la regulación financiera y la gobernanza global, el 23 de marzo de 2009, la CSI pidió a los sindicatos no sólo de los países del G20, sino de todo el mundo, presentar un conjunto común de reivindicaciones y exigencias a los líderes mundiales y a los gobiernos. El plan de cinco puntos denominado “Declaración de Londres” expone un amplio conjunto de medidas que la Cumbre del G20 debe adoptar para abordar la crisis y construir una economía global más justa y más sostenible para el futuro. Los cinco puntos son:

- 1) un plan internacional de recuperación y crecimiento sostenible para crear puestos de trabajo y garantizar las inversiones públicas;
- 2) la nacionalización de los bancos insolventes y nuevas regulaciones financieras;
- 3) medidas para combatir el riesgo de la deflación salarial y revertir décadas de creciente desigualdad;
- 4) medidas de gran alcance con respecto al cambio climático;

Centroamérica y el Caribe: lucha contra la erosión de los derechos de los trabajadores

La Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe (CSACC) aprovechó el Primero de mayo, Día del Trabajo para hacer un llamamiento a la unidad en la lucha contra la erosión de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La CSACC advirtió acerca de políticas antisindicales y de una reducción de las normas del trabajo, las cuales corren el riesgo de verse comprometidas a la hora de responder a los retos que plantea la crisis económica. El proceso de mantener la observancia de las normas del trabajo y de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo de la democracia y la justicia social y, en última instancia, puede ayudar a reactivar la economía. La Coordinadora CSACC insta a los gobiernos para optar por soluciones coherentes que difieran del modelo imperante.

5) un nuevo marco legal internacional para regular la economía global conjuntamente con una reforma de los organismos económicos y financieros mundiales (FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC).

Las centrales sindicales nacionales de un gran número de países, entre ellos Albania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, España, Japón, Malí, Marruecos, Polonia, Sudáfrica y Suecia ya han entregado a sus gobiernos la “Declaración de Londres”. El paquete de medidas también se discutió en una reunión especialmente convocada entre la CSI y la Confederación Europea de Sindicatos con el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso en Bruselas.

“Parece que se están dando pasos hacia una regulación efectiva de los mercados financieros y bancarios, así como en favor de la lucha contra el efecto destructivo de los paraísos fiscales sobre los ingresos de los gobiernos y la necesidad de una actuación decidida respecto al cambio climático, sin embargo, aún no se ha llegado al acuerdo necesario sobre el estímulo económico. Asimismo, sigue sin estar claro si se concederá a la Organización Internacional del Trabajo un papel central, a la par de los organismos financieros internacionales y los organismos de comercio en la configuración de la nueva economía mundial”, afirmó el Secretario General de la CSI Guy Ryder, dirigiéndose a los asistentes de una reunión especial tripartita de alto nivel sobre la crisis en el Consejo de Administración de la OIT.

La labor de presión por parte de los sindicatos en todo el mundo, incluyendo reuniones con líderes del G20 en los días previos a la Cumbre y también en Londres, constituyó un factor importante para lograr que el empleo sea incluido como una prioridad absoluta en el plan de reforma y recuperación.

El largo “camino hacia la recuperación” en las Américas

El devastador impacto de la crisis mundial era el primer punto del orden del día cuando las centrales sindicales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se reunieron en marzo de 2009 para celebrar la Cumbre anual de la Comunidad Andina de Naciones. Se discutieron las consecuencias directas de la crisis: el cierre de fábricas y el subsiguiente despido de millones de trabajadores y trabajadoras en la región andina y la manera de garantizar la seguridad y la supervivencia de todos ellos. Poco se ha hecho para garantizar una distribución justa de la riqueza social y económica entre las personas, o para garantizar un sector público que funcione adecuadamente y pueda invertir en las personas y la infraestructura. Los participantes de la Cumbre de la Comunidad Andina de Naciones aprobaron un programa para un nuevo orden económico haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y en una sociedad inclusiva que haga posible la participación activa de los trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos de la toma de decisiones.

En una reunión con el Presidente Lula da Silva, de Brasil, en abril de 2009, la CUT (Central Única dos Trabalhadores) examinó el estado de la economía brasileña, la forma de establecer nuevas medidas para luchar contra la crisis

Colombia: exigir un modelo alternativo de desarrollo

Además de las despiadadas violaciones a los derechos sindicales, los trabajadores y trabajadoras colombianos ahora tienen que lidiar también con la crisis económica. Para luchar contra el enorme desempleo y la profunda crisis económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) propone negociaciones tripartitas intensivas para ponerse de acuerdo sobre un modelo alternativo de desarrollo que garantice la estabilidad de los salarios, las pensiones y el empleo, un modelo que promueva la agricultura y el turismo para mejorar la productividad y la competitividad, un modelo que estimule efectivamente el mundo del trabajo centrándose en la construcción, la infraestructura y la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo.

y de proteger los puestos de trabajo y los salarios. Durante la reunión con el Presidente, la CUT destacó, entre otros aspectos, la necesidad de aprobar una nueva ley sobre el salario mínimo como un poderoso instrumento de distribución de ingresos y fortalecimiento del mercado interno.

En el estado de Mato Grosso do Sul en Brasil, Força Sindical y organizaciones de la sociedad civil han creado un comité para formular propuestas encaminadas a luchar contra la crisis y contrarrestar el creciente desempleo, así como los efectos perjudiciales de éste sobre la población. El comité ha escrito una carta abierta a los responsables de la toma de decisiones para explicar que los culpables de esta crisis no son las personas y, por consiguiente, las soluciones no deben afectar negativamente a los horarios de trabajo, los niveles salariales y los derechos laborales. En Mato Grosso do Sul, se ha reducido el gasto social y la inversión pública precisamente en el momento en que son más necesarios, y para agravar aún más la situación, en los últimos meses incluso han aumentado los impuestos sobre servicios públicos como el agua, la electricidad y el transporte.

En abril de 2009, los representantes de la UGT (União Geral dos Trabalhadores de Brasil) presentaron una demanda en el Supremo Tribunal Federal para solicitar que se extiendan cheques de desempleo a todos los trabajadores, no sólo a los antiguos asalariados de las industrias metalúrgica, mecánica, textil, química, automotriz y del caucho, según decisión del Ministro de Trabajo. Desde septiembre de 2008, más de 700.000 mil trabajadores y trabajadoras han perdido su empleo, pero sólo 103.000 tienen derecho a percibir prestaciones de desempleo adecuadas.



El Primero de mayo de 2009, aproximadamente 1,5 millón de trabajadores y trabajadoras salieron a las calles de Sao Paulo para manifestar en favor del trabajo decente y mostrar que los trabajadores están dispuestos a luchar contra la crisis económica. (Foto: Força Sindical).

América Latina: invertir en los jóvenes

La desaceleración del crecimiento económico en América Latina afectará negativamente el empleo de los jóvenes y el logro del trabajo decente. Un estudio de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (TUCA) señala la contracción del crédito y la baja de precios de los productos exportables como factores que repercuten negativamente en la situación laboral de los jóvenes en la región. La TUCA hace hincapié en la necesidad de implantar políticas económicas y sociales encaminadas a garantizar el flujo de crédito, estimular la demanda, asegurar la posibilidad de perfeccionar las competencias y mejorar el capital humano para los/las jóvenes.

En julio de 2009, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) puso en marcha una campaña nacional para velar por la ratificación del Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social. El Convenio 102 es el único instrumento internacional, fundamentado en los principios básicos de la seguridad social, que establece normas mínimas internacionalmente aceptadas en lo que se refiere a las prestaciones en materia de atención médica, enfermedad, desempleo, vejez, empleo, lesiones, familia, maternidad, discapacidad e invalidez y supervivencia. Para la CTA, es esencial que el gobierno reconozca la necesidad de establecer una seguridad social mínima en esta época de crisis, la cual podría utilizarse como un instrumento de redistribución permanente en un nuevo período de crecimiento, permitiendo a la vez una protección económica y social en los períodos de recesión.

En Estados Unidos, en el curso de los últimos 25 años, los salarios se estancaron mientras que los inversores y los dueños del capital se llevaron la mayor porción de los beneficios. La deuda de los hogares y el gasto de los consumidores siguieron en aumento y mantuvo a flote a la economía hinchada hasta que ésta estalló, provocando una crisis financiera y económica sin precedentes desde la Gran Depresión, en la década de los años 1930. Muchas familias trabajadoras de los Estados Unidos ya luchaban por ganarse la vida incluso antes de la actual recesión, y en un contexto de persistentes ataques contra el derecho a la negociación colectiva, la brecha cada vez más importante entre los ingresos seguirá ahondándose a menos que se establezcan marcos institucionales y reglamentarios, señala la central sindical American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), y añade que el problema real es que las personas tienen empleos mal remunerados, con pocas o ninguna prestación de salud y sin seguridad del empleo.

En Estados Unidos, los sindicatos despliegan creatividad y colaboración para hacer frente a la crisis energética, garantizar el empleo y la vuelta al trabajo y utilizan los muchos miles de millones de dólares de estímulo para cimentar un crecimiento económico sostenible a la vez que restablecen la equidad para la mano de obra. AFL-CIO considera que ésta es una oportunidad sin precedentes para garantizar una transformación económica fundamental y elaborar un nuevo modelo económico destinado a lograr la recuperación y la prosperidad compartida. Asimismo, los empleos verdes y decentes pueden crear el tipo de sostenibilidad real que tanto se necesita para el bienestar económico. A este respecto, AFL-CIO y otros sindicatos han puesto en marcha un Centro de empleos verdes para ayudar a preparar a los estadounidenses para la próxima generación de puestos de trabajo en el ámbito de la eficiencia energética, la protección del medio ambiente, la retroadaptación de edificios y el sector de las energías renovables.

La central sindical Canadian Labour Congress (CLC) está movilizand una campaña para el cambio: "Get real! It's the economy – make it work for us"²⁹. Se trata de una campaña articulada mediante tres ejes que se ocupa en primer lugar de la continua erosión experimentada por los derechos de los trabajadores y trabajadoras durante los últimos 25 años; el segundo presenta un plan para estimular la economía y crear y proteger los puestos de trabajo,

las pensiones y los servicios públicos y el tercero desea demostrar que el movimiento sindical puede desempeñar un papel en la lucha por la igualdad y ser parte de la solución. Según el Presidente de CLC, Ken Georgetti, Canadá ya ha perdido 406.000 empleos a tiempo completo desde octubre de 2008 y el número de canadienses desempleados asciende a 1,55 millones. La tasa de desempleo se situó en el 8,4 por ciento en mayo de 2009, la más alta en 11 años. De hecho, sólo el 46,8 por ciento de los desempleados perciben efectivamente prestaciones del seguro de empleo, pese a haber pagado ya el programa mediante sus primas. Esta situación afecta a miles de trabajadores y trabajadoras, sus familias y comunidades. No cabe duda de que es un sistema fallido desde el momento en que la red de seguridad con la que los trabajadores deberían poder contar no es capaz de ayudarles en tiempos difíciles. La campaña del CLC va a recorrer todo Canadá a lo largo de 2009.

Manifestaciones para frenar la caída del empleo en el sector forestal:

El sindicato canadiense Communications, Energy and Paperworkers (CEP) Union of Canada, miembro de la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), ha organizado siete “sentadas” en las oficinas de los principales legisladores del país. El sindicato exige ayuda financiera a nivel federal para este sector tan seriamente afectado, una férrea protección en materia de pensiones y una cumbre nacional sobre la crisis del sector forestal que aborde la estabilización del empleo y medidas de regeneración. CEP calcula que se han perdido 55.000 puestos de trabajo en el sector forestal en el curso de los últimos dos años.



Foto de la sentada realizada en la oficina del diputado canadiense, Jim Flaherty (Foto: CEP, www.cep.ca)

Singapur: “torcer el cuello a la recesión”

El National Trades Union Congress (NTUC) está decidido a “torcer el cuello a la recesión” para contar con una economía más fuerte y más resistente en el momento de la recuperación mundial. Parte de este enfoque es ayudar a los trabajadores y las trabajadoras a mantenerse en el empleo mediante el reciclaje y la adquisición de mejores competencias; ayudar a las mujeres y a los trabajadores de más edad a volver al mercado de trabajo y reforzar el tripartismo a fin de que las empresas puedan sobrevivir y mejorarse para poder salvar un mayor número de puestos de trabajo para los trabajadores.

Asia-Pacífico: los trabajadores tratan de proteger el empleo y reconstruir la economía

El 15 de julio de 2009 se observó en todo Pakistán una jornada nacional de protesta organizada por la Pakistan Workers’ Federation (PWF) con el propósito de persuadir al gobierno de que es preciso aumentar los salarios de los trabajadores empleados en los sectores industriales y comerciales de conformidad con la subida de los precios, así como manifestar su cólera por las políticas del gobierno contra los trabajadores. Existe un creciente descontento entre la población debido a que los partidos políticos no han logrado formular una estrategia conjunta para hacer frente a la crisis económica.

En junio de 2009, el Australian Council of Trade Unions (ACTU) presentó un nuevo plan para proteger el empleo y los derechos de los trabajadores en su Congreso trienal en Brisbane. Los sindicatos se han comprometido firmemente a poner en práctica el plan, que incluye un llamamiento al gobierno federal para que vincule el gasto público destinado al estímulo y la infraestructura a apoyar a las industrias locales. Además, el ACTU apoya medidas encaminadas a reconstruir la economía que aborden las causas subyacentes de la inestabilidad, tales como la reglamentación efectiva de las empresas y la limitación a la remuneración de los ejecutivos, que llevaron a la crisis económica mundial. Por último, el Congreso del ACTU llegó a la conclusión de que es imperativo examinar importantes reformas para garantizar ingresos y activos seguros para los trabajadores y sus familias, incluida la seguridad de prestaciones para los trabajadores y subvenciones para las empresas en los sectores que se encuentran en peligro y se ven obligadas a reducir la producción.

Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) se muestra preocupada ante la rápida precarización de la mano de obra, que se observa desde la primera crisis financiera y que ahora alcanza magnitudes más serias. De hecho, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Corea del Sur se han convertido en trabajadores con contratos precarios, a tiempo parcial o por cuenta propia. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Corea, en 2005, por lo menos el 56 por ciento de toda la fuerza de trabajo asalariada estaba integrada por trabajadores precarios. Actualmente, el 70 por ciento de las trabajadoras tienen empleos precarios y a menudo se les paga menos, trabajan más horas y tienen pocas prestaciones o ninguna.

La Federation of Korean Trade Unions (FKTU) y la Korea Employers Federation (KEF) están tratando de superar la actual crisis económica celebrando una reunión de diálogo social destinada a adoptar medidas de emergencia para lograr la seguridad en el empleo. También en febrero de 1998, inmediatamente después de la crisis financiera asiática, representantes tripartitos aprobaron un acuerdo social para superar la crisis económica. El acuerdo resultó ser un importante catalizador para la revitalización económica, y ha creado grandes expectativas en cuanto al papel de la nueva reunión de diálogo social nacional.

La Japanese Trade Union Confederation (JTUC-RENGO) mostró gran agilidad

para tomar medidas rápidas contra la crisis y dedicó todo el mes de diciembre de 2008 al deterioro de la situación del empleo en Japón. RENGO se reunió con el Primer Ministro, varios ministros y funcionarios gubernamentales para exigir medidas inmediatas en el ámbito del empleo para hacer frente a la situación de los trabajadores y trabajadoras vulnerables y fortalecer las redes de seguridad social. RENGO ha establecido un servicio de asesoramiento telefónico para dar a los miembros sindicales y a los estudiantes recién graduados asesoramiento sobre la forma de gestionar la pérdida de empleo, las reducciones salariales y la importante reducción de la oferta de empleo.

Evitar la tragedia del desempleo de larga duración de los jóvenes en Australia

Deben adoptarse medidas urgentes para evitar que una generación de jóvenes australianos se convierta en víctima del desempleo de larga duración como consecuencia de la crisis financiera mundial. Al contemplar los recortes y la manera de reducir sus actividades, es fundamental que los empleadores no se desprendan de los jóvenes en formación y los aprendices a las primeras señales de malos tiempos, ya que esta medida podría no permitirles terminar de adquirir las cualificaciones que necesitan, dificultando sus posibilidades de obtener un trabajo decente. Según los últimos datos, 91.000 jóvenes australianos que trabajan a tiempo completo perdieron su empleo en 2008, pero gracias a la formación, la educación y los sistemas de colocación, los trabajadores y trabajadoras jóvenes pueden encarrilarse de nuevo. "Debemos velar por que los jóvenes que comienzan su vida laboral no se queden atrás a causa de la crisis financiera mundial", afirmó Sharan Burrow, Presidente de ACTU. "Sería una tragedia si una generación de jóvenes australianos quedara atrapada en el desempleo de larga duración y la pobreza a consecuencia de esta recesión".

África no se ha librado de la recesión económica mundial

La crisis económica mundial se ha cobrado su tributo en el continente africano. Países ricos y pobres están sintiendo el impacto de las condiciones de crédito más estrictas, la disminución de las remesas de los trabajadores, la contracción de los mercados de exportación y los altos niveles de inflación en todos los sectores y regiones. Los logros contra la pobreza en África ahora se ven amenazadas por la desaceleración económica y, según el FMI, se prevé que el crecimiento del África Subsahariana presente una contracción de casi el 5½ por ciento en 2008 al 1½ por ciento en 2009 antes de recuperarse a casi un 3¼ por ciento en 2010, todavía por debajo de su nivel anterior a la crisis³⁰. Los altos precios de los alimentos y los combustibles del año pasado ya habían afectado a las finanzas y el presupuesto de los hogares de millones de familias trabajadoras de África. Ahora, se enfrentan a una segunda sacudida procedente de una crisis a la que en modo alguno contribuyeron.

CSI-África estima que la crisis ha afectado a una serie de sectores económicos como la minería, la agricultura, el turismo, los textiles y la fabricación. El cierre

Nueva visión para la buena gobernanza y la justicia social en Togo

Se delinea en Togo una nueva visión para el movimiento sindical con el fin de restaurar la buena gobernanza y la justicia social para todos. La CSTT (Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo) forma parte de la Coalición contra el alto costo de la vida, muy parecida a la creada por sus compañeros de Burkina Faso, y el objetivo de los sindicatos es reactivar el diálogo social con el fin de que se garanticen servicios sanitarios, salarios y condiciones de trabajo seguras así como pensiones de vejez tanto para los trabajadores y trabajadoras del sector informal como para los del sector formal.

de fábricas, el aplazamiento o cancelación de proyectos son frecuentes en un amplio número de países africanos. Desde principios de 2009, se han perdido miles de puestos de trabajo en el sector agrícola en diferentes países africanos, miles en la industria del turismo en Kenia, Tanzania y Mozambique, 36.500 en la industria del automóvil en Sudáfrica, 5.000 en la industria de los diamantes en Botswana, más de 3.000 en la del cobre en Zambia y una pérdida de 11.000 puestos de trabajo como resultado de más de 100.000 cancelaciones de abonos a la televisión en 22 países africanos.

Burkina Faso: la Coalición Nacional contra el alto costo de la vida

En marzo de 2008, el movimiento sindical y de la sociedad civil en Burkina Faso formó la Coalición nacional contra el alto costo de la vida; los exorbitantes precios de los principales alimentos básicos y el combustible los llevó a crear esta coalición, que también cuenta entre sus principales objetivos la lucha contra la corrupción y el fraude y protesta por las continuas restricciones a las huelgas y manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras en Burkina Faso. La coalición señala dos áreas principales en las que los trabajadores y la población están experimentando graves dificultades:

1. Los ajustes de los precios de los productos del sector de los cereales y otros alimentos básicos no han tenido lugar a pesar de las buenas cosechas y precios más bajos de los productos agrícolas a nivel internacional. De hecho, los precios siguen aumentando para determinados productos, como el sorgo, uno de los cultivos de cereales más importantes en África.
2. El ritmo al que la desaceleración económica está afectando a las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Para el gobierno y los interlocutores sociales, la cuestión consiste en apoyar la reactivación de la producción local para preservar y crear más puestos de trabajo y mantener un gran esfuerzo para establecer buenos programas de protección social.



Foto de la manifestación en Uagadugú (Fotografía: Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina).

La central sindical Centre for Trade Union and Workers Services (CTUWS) en Egipto pone de relieve en un informe de mayo de 2009 que, por cuarto mes consecutivo, se están despidiendo miles de trabajadores en los sectores del turismo, la hilatura, textiles, prendas de vestir y cuero³¹. La central CTUWS está especialmente preocupada por los empleadores que explotan a los trabajadores y las trabajadoras y les privan de sus derechos bajo el pretexto de la crisis económica mundial. Se señalan numerosos ejemplos de trabajadores a los que se pide trabajar horas extraordinarias no remuneradas, contratos permanentes que se convierten en temporales, supresión de los incentivos a la producción y muchos casos de retención indefinida de los salarios. Por tanto, la CTUWS considera que existe una creciente y urgente necesidad de activar los fondos de emergencia y de desempleo previstos por la legislación laboral y la ley de seguro social. A menos que el gobierno egipcio se disponga a hacer frente a la falta de responsabilidad social y de trabajo decente de las empresas, ciertamente surgirán más tensiones en el lugar de trabajo y reacciones más enérgicas por parte de los trabajadores.

La central sudafricana COSATU (Congress of South African Trade Unions) participó en reuniones de alto nivel en la Cumbre del G20 de Londres y se reunió con el entonces Presidente Kgalema Motlanthe para discutir, entre otras cuestiones, la forma en que la crisis mundial está afectando a los trabajadores y trabajadoras de Sudáfrica, la contracción de los salarios, la disminución de las exportaciones, la caída de los precios de los productos básicos y el declive de los sectores de la transformación y la minería. COSATU considera que la Cumbre del G20 no hizo lo suficiente para abordar la economía real, las cuestiones sociales, el trabajo decente y la reducción de la pobreza y seguirá pendiente en los próximos meses de las promesas hechas por los gobiernos del G20.

Conferencia de la ONU para dar una respuesta global y coordinada a la crisis

En junio de 2009, una delegación sindical participó en una conferencia de tres días de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la crisis económica y financiera mundial y su impacto sobre el desarrollo. Los sindicalistas destacaron la necesidad de poner en práctica las recomendaciones del Pacto Global de la OIT para el Empleo, de centrarse en la inversión en infraestructura pública, en programas especiales de empleo, en la protección social y en lograr cambiar a una pauta de crecimiento con un bajo contenido de carbono que suscite la creación de puestos de trabajo verdes y decentes. La delegación presionó para apoyar las Recomendaciones del Informe de la Comisión Stiglitz encaminadas a garantizar que los países en desarrollo dispongan del espacio político necesario para aplicar las políticas anticíclicas recomendadas en el informe, sin las perjudiciales condicionalidades de las instituciones financieras internacionales.

FEDUSA (Federation of Unions of South Africa), por su parte, señala que el sector de la minería, en particular, está en proceso de contracción con grandes repercusiones sociales como inevitable resultado. FEDUSA está profundamente preocupada por la posible pérdida de puestos de trabajo y las dificultades



Foto de la manifestación en Berlín, 16 de mayo de 2009, convocada por la CES y la Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB).

Rumania: despidos masivos en todos los sectores

En Rumania, 300 empresas han anunciado el despido de 34.000 trabajadores. Más de 300 empresas, en su mayoría privadas, han anunciado que dejarán sin empleo a 33.837 personas más en febrero, marzo, abril y mayo, según datos de la Agencia Nacional del Empleo (ANOFM). Los sectores más afectados son la extracción de petróleo crudo y gas natural, donde 3.746 personas han perdido su trabajo, la fabricación de vehículos de carretera (3.405 empleos), la fabricación de sustancias y productos químicos (3.335 empleos), las obras de ingeniería civil (2.848 empleos) y la construcción de edificios, donde han sido despedidos 2.667 trabajadores.

económicas causadas por la crisis económica mundial así como los retos que plantea la trayectoria de crecimiento de Sudáfrica. A guisa de respuesta, FEDUSA ha preparado una propuesta titulada “Capear la tormenta” con el fin de proteger a los trabajadores y las trabajadoras de los efectos negativos de la crisis sobre la economía real y velar porque se adopten todas las medidas posibles para proteger a los sudafricanos, apoyar a las empresas productivas y salvaguardar los puestos de trabajo. Las estrategias que deben seguirse son, entre otras, asegurar un flujo sostenible de crédito para ser invertido en la economía; garantizar que el progreso social no se vea socavado por la actual crisis económica; crear un entorno macroeconómico estable cuyo objetivo principal sea el crecimiento real y la creación de empleo e impulsar el empleo en el sector público, especialmente en obras de infraestructura como escuelas, hospitales, agua potable y saneamiento, transporte público y energía.

Recortes, despidos y una agenda social insuficiente afecta a todos en Europa

Del 14 al 16 de mayo de 2009, 350.000 personas recorrieron las calles de Berlín, Bruselas, Madrid y Praga, para pedir un nuevo acuerdo social y exigiendo a los gobiernos nacionales que se tomen en cuenta a “Las personas primero”. La movilización, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) conjuntamente con los sindicatos alemanes, belgas, checos y españoles, presentó un ambicioso plan al Consejo Europeo y a la Comisión Europea pidiéndoles invertir en más y mejores puestos de trabajo como parte de la recuperación económica. Con la asignación del 1 por ciento anual del PIB europeo podría garantizarse la inversión en nuevas tecnologías verdes y sostenibles, más formación continua y educación de calidad destinada a los trabajadores y trabajadoras para hacer frente a los crecientes retos que plantea el mercado de trabajo así como un nuevo acuerdo social para fortalecer los sistemas sociales y prevenir la exclusión social.



Foto de la manifestación en Madrid, 14 mayo de 2009, convocada por la CES y los sindicatos españoles (CC.OO., UGT y USO)

Bulgaria: ¡Pongamos a las personas primero!

La manifestación con el lema "¡Pongamos a las personas primero!" fue organizada por la Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) el 16 de junio de 2009, y miles de personas se reunieron en la plaza Macedonia para pedir al gobierno garantizar los gastos previstos en el presupuesto para el funcionamiento normal de los sistemas de pensión, sanidad y educación y garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras a través de aumentos en los subsidios de desempleo así como ayudas para las familias que no pueden pagar los préstamos hipotecarios de su vivienda.

Albania: los sindicatos exigen medidas contra la crisis

El Primero de mayo de 2009, 3000 personas se congregaron en la plaza principal de Tirana cuando representantes de la Confederación de Sindicatos de Albania (KSSH) así como organizaciones de la juventud y femeninas exigieron la intervención urgente del gobierno para cooperar con los sindicatos en la elaboración de un paquete de medidas para luchar contra la crisis a fin de minimizar las repercusiones de la crisis económica y financiera en la economía de Albania.

Los países de Europa del Este, incluidos algunos de los recientes Estados miembros de la Unión Europea, se han visto muy duramente afectados por la recesión económica mundial; las monedas están en caída libre, el crédito se ha agotado y el FMI ha concedido préstamos de emergencia a gran escala a varios países en la región. El mes de abril de 2009, una de las confederaciones húngaras, MSZOSZ, reunió a miles de trabajadores y trabajadoras en las calles de Budapest. Los sindicatos consideran que las nuevas medidas económicas para la gestión de la crisis deben concebirse para que afronten las consecuencias sociales para los trabajadores y los pensionistas. El mensaje que resonó hasta el Parlamento fue el de un diálogo significativo para garantizar que se consulte a los trabajadores a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los aspectos de sus vidas.

Seminario del Comité Femenino del CRPE

El Comité Femenino del Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) organizó un seminario de trabajo en Sofía, Bulgaria en mayo de 2009 para analizar el impacto de la crisis económica sobre las mujeres y la informalización de la economía. Sesenta participantes y expertos de la OIT, la CSI, la CES y organizaciones no gubernamentales presentaron sus investigaciones sobre las mujeres y la crisis económica, la desigualdad de género en tiempos de crisis, las mujeres y la economía informal así como las consecuencias de la crisis sobre el trabajo doméstico. El seminario hizo una importante contribución al desarrollo de las estrategias sindicales respecto a la dimensión de género de la crisis.

Según NSZZ "Solidarność", el gobierno polaco está descuidando seriamente su responsabilidad y deber constitucional para con sus ciudadanos al no proporcionar una respuesta adecuada a la crisis. El gobierno debería preocuparse de la protección de los puestos de trabajo, de los más pobres y vulnerables de la sociedad, de mantener el poder adquisitivo de las personas y de reconstruir el diálogo social entre los socios. Para proteger a los trabajadores y las trabajadoras contra los resultados nefastos de la recesión económica, la Comisión Nacional de NSZZ "Solidarność" ha puesto en marcha una campaña denominada "Solidaridad contra la crisis", cuyo objetivo es reducir el riesgo de desempleo y la pérdida de ingresos y, además, alentar a los trabajadores y trabajadoras a afiliarse a un sindicato a fin de lograr mayor seguridad y tener la posibilidad de influir en la situación en el lugar de trabajo.

En Ucrania, la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU) ha expresado su profunda preocupación por los procedimientos de financiamiento para emergencias y las condiciones de préstamos del FMI. Los países muy endeudados no tuvieron otra alternativa que tomar medidas drásticas para evitar un colapso económico, pero ¿a qué precio? Un préstamo por un valor de 16,4 mil millones de dólares emitido en noviembre de 2008 se ha destinado a restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera y también debería tener en cuenta la necesidad de incrementar el gasto social para hacer frente a los efectos de la recesión sobre la población. De hecho, se supone que el 0,8

Croacia: defender los derechos de los jubilados

El 7 de mayo de 2009, el Sindicato de Trabajadores Jubilados de Croacia (SUH), afiliado a la central sindical UATUC (Union of Autonomous Trade Unions of Croatia), inició una campaña en todos los condados de Croacia en defensa de los derechos de las personas jubiladas. Los sindicatos sostienen que una pensión debe permitir un nivel de vida decente, lo que significa que la pensión media debería ascender por lo menos al 60 por ciento del salario medio. Vistas las condiciones de la crisis económica, es necesario desarrollar un programa de protección especial para las personas jubiladas a fin de preservar la dignidad de este sector de la población, donde un gran número se encuentra en la pobreza.

Por Letonia, contra la injusticia

En junio de 2009, alrededor de 7000 personas en Riga y otras 7.600 personas en varias ciudades letonas participaron en la manifestación “Por Letonia, contra la injusticia”, convocada por LBAS (Confederación de Sindicatos Libres de Letonia) para expresar su preocupación por el deterioro de la situación económica del país.

por ciento del PIB se destina a proteger a los grupos vulnerables. Sin embargo, la federación FPU señala que las prestaciones sociales para que las familias necesitadas paguen los servicios públicos han sido canceladas por el gobierno; además, quiere aumentar cinco años a la edad de jubilación actual de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres. Actualmente, se calcula que la esperanza media de vida es de solamente 68 años (62 años para los hombres), lo que significa que el 40 por ciento de los hombres y una de cada nueve mujeres no vivirá hasta la edad de la jubilación. En otras palabras, el gobierno ucraniano ha transferido la carga de la crisis y las dificultades económicas a los más pobres.

El auge de Irlanda, el que alguna vez fuera el “Tigre celta” está en plena desaceleración; las previsiones de crecimiento anual de su PIB son las más bajas en muchos años y, en abril de 2009, el desempleo alcanzó su máximo nivel de un 11 por ciento en tres años. El colapso del empleo puede conducir a una tasa de paro de casi el 17 por ciento en 2010, según la central sindical ICTU (Irish Congress of Trade Unions) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. El Secretario General de ICTU, David Begg, explicó que es poco probable que Irlanda se recupere antes de que la economía mundial se haya recuperado y que requerirá, además de un sistema financiero mundial rediseñado y debidamente regulado, un reequilibrio de los intercambios comerciales, el desapalancamiento de la deuda del sector privado y la dispersión de la superabundancia del ahorro en Asia. Irlanda debería “utilizar los recursos con los que contamos para mitigar en la mayor medida de lo posible la carga del ajuste económico y hacer que recaiga en los que tienen las espaldas más anchas”, considera Begg, y añade que los trabajadores irlandeses “tienen derecho a esperar que el Estado los proteja en tiempos de crisis”.



El mes de febrero de 2009, 150.000 personas salieron a las calles de Dublín en la mayor manifestación pública de protesta vista en la capital en los últimos 30 años. Las protestas se dirigieron contra el intento del gobierno de transferir tanto la culpa como la carga de la actual crisis económica a las espaldas de los bajos y medianos ingresos. Además se protestó por la incapacidad del gobierno a hacer frente eficazmente a la creciente crisis del empleo. (© Irish Congress of Trade Unions).

Finlandia: llamamiento a la unidad de acción de la UE contra la crisis

AKAVA, la Confederación de Sindicatos para Trabajadores Profesionales y Personal Directivo en Finlandia, espera que la UE establezca normas más comunes que fijen los niveles mínimos europeos en relación con la legislación laboral, la salud y seguridad ocupacional y la igualdad en la vida laboral. AKAVA propone que la UE tome medidas en cuatro ámbitos: mejorar la calidad de la vida laboral, aumentar el nivel de las competencias europeas, promover nuevos puestos de trabajo verdes y encarrilar la economía hacia un crecimiento sostenible. Todos estos aspectos son necesarios para hacer frente a la recesión y a los retos de la globalización.

El auge y caída del sistema bancario islandés y de la economía del país no es una mera consecuencia del colapso de las instituciones financieras estadounidenses. La verdadera razón de la crisis de Islandia son muchos años de una política económica poco acertada por parte del gobierno nacional, de los gobiernos municipales y del Banco Central de Islandia, según la ASI (Confederación del Trabajo), quien había advertido en repetidas ocasiones al gobierno de que la única incógnita consistía en saber cuándo iba a derrumbarse la moneda y no si iba a derrumbarse o no, lo que supondría graves consecuencias para la inflación y el empleo. Sin embargo, en un lapso de tiempo muy corto, de septiembre a octubre de 2008, se desplomaron tres bancos, el valor de la corona cayó más del 70 por ciento y el mercado bursátil perdió más del 80 por ciento de su valor. Para una pequeña economía, que depende totalmente de las importaciones, como Islandia, ésta es una crisis de proporciones enormes. Desde el comienzo de la crisis, los sindicatos tanto del sector público como del privado han manifestado estar dispuestos a colaborar con los empleadores en la búsqueda de un consenso sobre la mejor manera de ayudar al mercado de trabajo. Precisamente con respecto a éste, se han introducido agresivas medidas, como la reducción del tiempo de trabajo de todos los trabajadores a un 75-80 por ciento de su horario anterior a la crisis, como respuesta a aquellas empresas que, de otra manera, despedirían el 20-25 por ciento de sus trabajadores. No obstante, estas medidas, la tasa de desempleo aumentó del 0,8 al 8,5 por ciento en pocos meses. Además, el efecto inmediato de la crisis sobre los particulares se ha manifestado en una pérdida de ahorros y un aumento dramático de la deuda privada, debido a la indización de los préstamos de vivienda de acuerdo con la inflación, la caída de la moneda y la elevada inflación.

Respuesta a la crisis en Suecia y Dinamarca:

Los trabajadores industriales y de la metalurgia de Suecia negociaron con sus empleadores un acuerdo marco sobre despidos temporales y formación con el claro propósito de evitar más pérdidas de puestos de trabajo. El acuerdo permite llegar a acuerdos locales sobre la reducción de las horas de trabajo y la consiguiente reducción de remuneración: hasta una disminución máxima del 20 por ciento del horario de trabajo y de la remuneración. La falta de una política activa del mercado de trabajo por parte del gobierno, así como recortes en las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras afecta gravemente a las personas que pierden sus puestos de trabajo, por lo que el sindicato IF Metall se vio obligado a tomar estas medidas drásticas.

La Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO) propone que debería darse a los trabajadores y trabajadoras la oportunidad de solicitar cursos de formación continua o de capacitación durante este período de recesión económica y contracción de las empresas. El creciente número de personas desempleadas necesita más formación, cualificaciones y competencias para tener la seguridad de estar mejor preparadas para buscar nuevas oportunidades a la hora de reincorporarse al mercado laboral.

Austria: los sindicatos proponen un extenso paquete de medidas para el empleo

En Austria, la ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) ha presentado al gobierno un extenso paquete de medidas a favor del mercado de trabajo con el fin de que se destine una inversión a más largo plazo a la formación de altas competencias y cualificaciones para los trabajadores y trabajadoras, tanto jóvenes como a los de más edad.

La central británica TUC (Trades Unions Congress) ha advertido sobre el desproporcionado impacto de la recesión económica en los jóvenes, uno de los sectores más afectados. La crisis está haciendo que miles de jóvenes titulados compitan por puestos de trabajo que requieren menos cualificaciones, lo que aumenta el desempleo entre los jóvenes que no tienen un título o diploma, y ejerce una mayor presión a la baja de los salarios. TUC propone reducir la edad en la que puede percibirse el salario mínimo de adultos, es decir los 18 años en lugar de 22, afirmando que esta medida acelerará el proceso de recuperación económica, porque el aumento de renta disponible de los que perciben salarios más bajos es una de las mejores formas de aumentar la demanda en la economía y creará más estabilidad a largo plazo. Puesto que a los 18 años se está autorizado a votar, casarse e incorporarse al ejército, no hay ninguna razón para que los trabajadores y trabajadoras jóvenes no deban percibir la misma remuneración por un puesto de trabajo.

El desempleo de la juventud en Reino Unido: una cicatriz en la vida de los jóvenes

Los trabajadores industriales y de la metalurgia de Suecia negociaron con sus La tasa de desempleo juvenil ha alcanzado su nivel más alto en 15 años, según las últimas estadísticas del mercado de trabajo de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) del Reino Unido. La tasa de desempleo entre los jóvenes de 18-24 años fue del 16,6 por ciento durante el periodo de febrero a abril de 2009. Esta situación se deteriorará aún más cuando millones de estudiantes que abandonan la escuela así como jóvenes diplomados con un título en la mano busquen empleo en los próximos meses. Brendan Barber, Secretario General de TUC insiste en la gravedad de la situación: "El desempleo deja una cicatriz permanente en la vida de los jóvenes y el gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para que el desempleo no arruine la vida de otra generación".

Una coalición de sindicatos franceses (CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO y UIR-CFDT) ha hecho un llamamiento para que las medidas sociales ocupen el centro de las políticas económicas del gobierno. Durante demasiado tiempo se ha dado al sector público y al Estado de bienestar francés menor prioridad de la que merecen, y el movimiento sindical reclama medidas urgentes para contrarrestar las pérdidas masivas de puestos de trabajo así como un aumento del gasto público en cuestiones sociales. Para volver a encarrilar a la economía francesa, los sindicatos proponen incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con el fin de impulsar la demanda y que las medidas económicas para hacer frente a la crisis favorezcan un desarrollo sostenible. Sin un compromiso serio en favor de un aumento del salario mínimo, redes de seguridad social más amplias y flexibles y un ambicioso plan para hacer frente a la dicotomía de un mercado de trabajo, que tiene empleos decentes y permanentes por un lado y empleos no protegidos y a corto plazo por el otro, las respuestas inmediatas y estructurales sobre cómo salir de la crisis no resultarán satisfactorias, sostiene los sindicatos.

FNV Juventud: luchar para no perder una generación

La organización de la juventud *Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)* ha instado al gobierno y a los interlocutores sociales a dar prioridad al empleo de los jóvenes para evitar el peligro de una “generación perdida”, ahora que el desempleo aumenta con tal rapidez. FNV Juventud propone la garantía de un puesto de trabajo o una formación en el plazo de seis meses para los/las jóvenes desempleados/as, y ha presentado su plan al Ministro de Juventud y Familia.

Los trabajadores y trabajadoras jóvenes son los que corren mayor riesgo. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15-24 años es del 21 por ciento en Francia y a menos que se busque su inclusión activa en el mercado de trabajo, incluido un mayor número de puestos de aprendizaje y formación continua destinada a los/las jóvenes, gran parte de la próxima generación acabará en situaciones de trabajo precario. Además, se observa el aumento del desempleo “a tiempo parcial”. A los empleadores franceses se les permite reducir las horas de trabajo de sus trabajadores por debajo de las 35 horas semanales si la situación económica de una empresa es particularmente grave o se prevé una reestructuración. En épocas como ésta, a los sindicatos les preocupa que los empleadores exploten esta modalidad temporal para introducir a los trabajadores asalariados en el sistema de desempleo sin violar los contratos laborales.

Los sindicatos presionan para que el G8 se centre en el empleo

Representantes de la CSI y John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la OCDE, participaron en la Cumbre del G8 celebrada en Italia en julio de 2009 y se reunieron con los ministros del gobierno anfitrión, así como con el Primer ministro Silvio Berlusconi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para hablar sobre el empleo y la recuperación económica.

La TUAC, la CSI y sus socios de la Agrupación Global Unions están preocupados de que la crisis se profundice aún más, aumentando el desempleo en todo el mundo y el riesgo de una deflación salarial competitiva, que podría ocasionar una depresión aún mayor de la demanda en la economía mundial. “En tanto que el trabajo decente no se considere un objetivo central en la toma de decisiones económicas, persistirán las fallas que ocasionaron la actual crisis, y una posible recuperación se vería permanentemente amenazada” afirmó John Evans. Lamentablemente, la Cumbre no formuló propuestas concretas sobre cómo disponer de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de empleo y protección social.

Dos grandes confederaciones españolas, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), conjuntamente con sus compañeros portugueses de la União Geral de Trabalhadores (UGT-P) y la Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), convocaron una manifestación en la frontera hispano-portuguesa en junio de 2009. Los sindicatos formaron un frente unido para mostrar que ambos países experimentan el deterioro de las condiciones de trabajo y numerosos despidos a causa de la crisis. Su protesta “por el trabajo digno y contra el desempleo” es un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones europeas para la reestructuración de una acción urgente encaminada a hacer frente a la exclusión social y a las crecientes dificultades económicas que experimentan los millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo.

IV. El camino hacia la recuperación: una estrategia sindical para hacer frente a la crisis

La primera respuesta de la CSI: los sindicatos en la reunión del G20 en Washington, noviembre de 2008

Los gobiernos de las principales potencias económicas del mundo tardaron en reaccionar de forma coordinada pero, aunque tarde, líderes de los países del G20 celebraron una “Cumbre sobre la Crisis” en Washington D.C. el 15 de noviembre de 2008. La CSI, conjuntamente con la TUAC, organizó reuniones sindicales paralelas acogidas por la AFL-CIO y se reunió con líderes del G20, el FMI y el Banco Mundial con objeto de lograr apoyos a las propuestas sindicales para hacer frente a la crisis.

Los líderes sindicales de los países del G20 se reunieron con los máximos dirigentes del FMI y el Banco Mundial y con varios Jefes de Estado y otros representantes gubernamentales, incluyendo el Presidente de Brasil, Lula da Silva, el Primer Ministro de Japón, Taro Aso y el Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd, en vísperas de la cumbre del G20 sobre la crisis financiera celebrada en Washington. Anteriormente se habían celebrado reuniones en sus respectivos países entre sindicatos nacionales y el Primer Ministro del Reino Unido, el Presidente del Gobierno de España y el Presidente de Francia.

Las discusiones entre los sindicatos y los jefes de Estado y de gobierno reuniones se abordó cómo coordinar un plan de recuperación para la economía real, una nueva regulación de los mercados financieros mundiales, establecer un nuevo sistema internacional de gobernanza económica y una estrategia para luchar contra las crecientes desigualdades en el mundo. Los líderes manifestaron su acuerdo o su interés con muchas de las propuestas sindicales, así como su apoyo en general a la demanda sindical de que se cuente con la participación del movimiento sindical en las discusiones sobre el diseño de una nueva arquitectura financiera global mundial.

El movimiento sindical internacional hace un llamamiento a los líderes del mundo y a las instituciones internacionales para desarrollar una economía mundial más justa y sostenible para las generaciones venideras. La estrategia, que se resumirá en el presente capítulo, deberá:

- poner en marcha un plan de recuperación y de crecimiento sostenible coordinado a nivel internacional que dé un fuerte impulso a la creación de empleo centrándose en la inversión pública, políticas activas del mercado de trabajo, la protección de los más vulnerables mediante la creación de amplias

redes de protección social, así como inversiones en la “economía verde” capaces de orientar la economía mundial hacia un modelo de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Las economías en desarrollo y emergentes deberán disponer de los recursos y el espacio político necesarios para la aplicación de políticas anticíclicas;

- restaurar la confianza y los créditos en el sistema financiero y, más importante aún, establecer nuevas reglas y mecanismos de control del sector financiero con una fuerte implicación de los interesados;
- luchar contra el riesgo de deflación salarial y contra el aumento de las desigualdades de ingresos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las instituciones encargadas de fijar los salarios, de tal manera que se establezca una base decente en los mercados laborales;
- sentar las bases para la consecución de un acuerdo internacional ambicioso y cabal sobre el cambio climático en la COP15 en Copenhague, en diciembre de 2009;
- establecer un marco de normas e instrumentos jurídicos de referencia para las instituciones internacionales en la esfera económica y social – la OIT, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE –, y proceder a la reforma de tales instituciones, constituyendo una gobernanza económica mundial eficaz, que cuente con mecanismos de rendición de cuentas.

Punto 1: Una recuperación coordinada y un crecimiento más sostenible para el empleo y los ingresos

La necesidad de coordinación

La primera prioridad para los líderes del mundo ha de ser restaurar la confianza poniendo fin a la caída libre del crecimiento mundial y revertir el descenso del empleo. Los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias a tal efecto y utilizar su influencia con los bancos para conseguir que los créditos vuelvan a circular y proporcionen liquidez adicional. Desde noviembre de 2008, la mayoría de los países del G7, del G20 y otros, han anunciado o aplicado medidas fiscales para fomentar el crecimiento. Dichas medidas tendrían el doble de impacto sobre el empleo y el crecimiento de haberse coordinado y complementado internacionalmente³². De momento esta coordinación no existe: el plan de estímulo en EE UU es por lo menos el 2 por ciento del PIB anual, mientras que las medidas nacionales en la UE anunciadas a principios de febrero de 2009 ascienden a apenas el 1 por ciento del PIB de la UE. Es hora de que los actuales o “free-riders” (oportunistas) actúen y tomen medidas coordinadas para estimular la economía mundial, y son los países con excedentes comerciales los que deberían tomar la iniciativa. Reiteramos nuestro llamamiento para que se apruebe un plan adicional de recuperación europeo correspondiente al menos al 2 por ciento de la producción mundial. Los bancos centrales deberían seguir reduciendo las tasas de interés y emprender una relajación cuantitativa de la política monetaria, de manera que las inversiones públicas puedan financiarse con un coste reducido en cuanto a las tasas de interés.

Teniendo en cuenta que se cierne el espectro de una crisis persistente del empleo, urge encontrar una estrategia de recuperación coordinada internacionalmente, orientada hacia el empleo, y mucho más coherente de lo que se ha presentado hasta la fecha.

Teniendo en cuenta que se cierne el espectro de una crisis persistente del empleo, urge encontrar una estrategia de recuperación coordinada internacionalmente, orientada hacia el empleo, y mucho más coherente de lo que se ha presentado hasta la fecha. El movimiento sindical internacional está seriamente preocupado por el hecho de que los paquetes de estímulo fiscal propuestos hasta la fecha resultan inadecuados, desequilibrados geográficamente, no están suficientemente centrados en cuestiones laborales y se aplican de forma excesivamente lenta³³. Como se indicó en el capítulo I, según un estudio realizado por la OIT respecto a las respuestas a la crisis en más de 40 países, las medidas de estímulo fiscal adoptadas no se centran suficientemente en el empleo y la protección social y sólo la mitad de los países examinados han anunciado iniciativas relacionadas con el mercado de trabajo. Además, no han abordado la falta de protección social y el dramático descenso del ahorro de los particulares en fondos de pensiones. Los efectos de la crisis repercuten más sobre aquellos con pensiones en regímenes no protegidos de 'contribuciones definidas', que no ofrecen la seguridad de cobrar una pensión al llegar a la edad de la jubilación³⁴.

Gasto público orientado al empleo

Deben tomarse paquetes de medidas de recuperación en el interior de los países, a fin de tener el máximo impacto posible sobre el crecimiento y el empleo. Es necesario trazar un nuevo mapa económico, que identifique aquellos sectores que ofrecen mayores oportunidades para el futuro crecimiento. Los gobiernos deberían emprender programas de inversión en infraestructura que estimulen el crecimiento de la demanda a corto plazo y aumenten la productividad en la economía real a medio plazo. Convendría introducir medidas para incrementar el poder adquisitivo de los asalariados con bajos ingresos, incluyendo los hogares donde entra un único salario y donde el cabeza de familia suele ser la mujer. Inyectando más dinero en los bolsillos y las carteras de las personas con ingresos bajos se estimulará la economía, puesto que dispondrán de mayores posibilidades de gastar el dinero extra rápidamente, contribuyendo a superar la recesión. Este impulso puede lograrse incrementando las prestaciones, con programas de creación de empleo y cambiando los niveles impositivos. Sin embargo, no deben desperdiciarse recursos mediante ineficaces recortes generalizados de impuestos: durante una recesión, invertir en redes de seguridad social y transferencias de servicios públicos locales, incluyendo educación y salud, tendrían prácticamente el doble de impacto que las reducciones de impuestos.

Los mercados laborales están en el vórtice de la crisis y el desempleo seguirá aumentando en 2009 y permanecerá a ese nivel durante 2010 y 2011. Los jóvenes, en particular, están resultando muy afectados, con tasas de desempleo juvenil de más del 20 por ciento en muchos países del G8 y en otros lugares del mundo, con la perspectiva de que la cohorte de jóvenes que terminan sus estudios en los colegios y universidades este verano corren el riesgo de verse condenados a la inactividad económica. Las empresas siguieron despidiendo trabajadores durante 2009, lo que da muestras de una falta de confianza empresarial y la perspectiva de que el desempleo a largo plazo va a aumentar en todos los grupos demográficos. De las lecciones aprendidas de otras crisis

Durante una recesión, invertir en redes de seguridad social y transferencias de servicios públicos locales, incluyendo educación y salud, tendrían prácticamente el doble de impacto que las reducciones de impuestos.

financieras anteriores se desprende que los mercados laborales generalmente se quedan atrás respecto a la recuperación económica y que los incrementos considerables en el desempleo, particularmente si es a largo plazo, son extremadamente difíciles de revertir. Esto apunta al riesgo de una prolongada recesión del mercado laboral.

Inversiones y empleos verdes

No se presentará mejor ocasión que ésta para lanzar el “Nuevo Trato Verde”, solicitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El programa de “Empleos Verdes” requiere que los gobiernos realicen inversiones a gran escala en infraestructuras verdes, como las que producen eficiencia energética y energías renovables, estimulando así la creación de empleo de calidad en una serie de sectores, además de incrementar el nivel de recursos financieros para investigación y desarrollo, la difusión y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la mejora de los sistemas de desarrollo de capacidades. La aplicación de un programa de “Empleos Verdes” ayudará a la creación de millones de nuevos puestos de trabajo ecológicos en todo el mundo, al tiempo que subraya la necesidad de una transición justa e imparcial para los trabajadores y sus familias afectados por el cambio climático y por las decisiones gubernamentales de reducir las emisiones de carbono.

Servicios públicos de calidad

Desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico requiere inversiones en unos servicios públicos de calidad, incluyendo educación, salud, sanidad y agua, cobertura legal y seguridad, así como protección social para todos. Las inversiones del sector público y servicios públicos de calidad pueden aportar una contribución vital a la cohesión y justicia social, lo que conjuntamente con una administración ética y efectiva de la legislación y la aplicación de marcos reguladores, constituyen las piedras angulares de unas sociedades democráticas sanas.

Es hora también de invertir en las personas, en su educación y salud, y en atención para los más pequeños y los ancianos. Teniendo en cuenta el ritmo acelerado de pérdidas de puestos de trabajo en las industrias afectadas por la crisis, se justifica plenamente la inversión en educación y formación para apoyar la transferencia de trabajadores y trabajadoras a sectores donde se necesite más mano de obra. En los sectores de la sanidad/cuidado de personas, por ejemplo, debido entre otros factores al envejecimiento de la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se necesitan 4,2 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo. En el sector educativo, es preciso dar formación a 18 millones de nuevos docentes para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos los niños en primaria para el año 2015. Millones más de profesores e instructores son necesarios para la educación y formación profesional en cualificaciones que contribuyan a apuntalar la economía real y para la reconversión de los trabajadores y trabajadoras a medida que se produce la reestructuración de las economías. Además, los gobiernos deberán redoblar esfuerzos para reducir la pobreza entre las mujeres, que constituyen actualmente la mayoría de los pobres en el mundo.

Políticas activas del mercado de trabajo

La prioridad debe ser mantener a las personas trabajando, las plantillas en pie y a los trabajadores en activo. Para poner alto al aumento del desempleo en todo el mundo, las Políticas Activas del Mercado de Trabajo (PAMT) desempeñan un papel esencial, sin embargo, la inversión en las PAMT ha supuesto apenas una mínima parte de los paquetes fiscales adoptados por la mayoría de los países (como se mostró con cifras en el capítulo I). Deben aplicarse programas destinados a reducir el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo y de salario, además de proporcionar subsidios. En estos momentos difíciles, las empresas deben ser socialmente responsables e intentar retener a los trabajadores y trabajadoras el mayor tiempo posible. En la OIT, trabajadores, gobiernos y empleadores acordaron que “la reestructuración debe basarse en el diálogo y consultas entre gerencia, sindicatos y representantes de los trabajadores”³⁵. Las empresas que reciban ayuda pública deben respetar los acuerdos con gobiernos y sindicatos y aplicar programas de reestructuración consensuados que incluyan componentes de empleo y formación.

Los gobiernos deben adoptar políticas del mercado de trabajo que:

- impidan que las empresas recurran automáticamente a la reducción de plantilla al más mínimo signo de dificultades y brinden apoyo a las empresas afectadas por dificultades crediticias temporales;
- se centren en los grupos más afectados por la crisis, como los trabajadores/as jóvenes, los mayores y los no cualificados, los que tienen contratos a tiempo parcial o temporal, las mujeres y los migrantes;
- redoblen esfuerzos para eliminar la brecha salarial, que se estima actualmente superior al 22 por ciento³⁶;
- proporcionen subsidios, particularmente prestaciones de desempleo ampliadas;
- garanticen el pleno respeto de las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los trabajadores en lo que respecta al cese del empleo;
- promuevan la inversión en recursos humanos y ofrezcan mejores oportunidades de formación para facilitar la adquisición de nuevas cualificaciones a los trabajadores/as de todas las edades;
- garanticen a los trabajadores/as migrantes los mismos derechos que a los demás ciudadanos, puesto que su estigmatización no sólo conduce a la xenofobia sino que contribuye a exacerbar la pobreza.

Apoyo a las economías emergentes y en desarrollo

Con el rápido aumento del desempleo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo no tienen derecho a recibir prestaciones de desempleo cuando pierden su trabajo y sólo pueden recurrir a sus propios ahorros o a la ayuda de sus familiares cuando llegan a la vejez. La crisis presenta tanto una obligación como una oportunidad para establecer redes de seguridad social decente que puedan actuar como estabilizadores automáticos en países que

La crisis presenta tanto una obligación como una oportunidad para establecer redes de seguridad social decente.

de momento no las tienen, independientemente del nivel de desarrollo.

Incrementar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y ampliar la protección social serán particularmente importantes para la recuperación de las economías emergentes que habían alcanzado un alto crecimiento gracias al desarrollo orientado a la exportación y que ahora se enfrentan a un colapso de sus principales mercados de exportación. La recuperación económica en estos países y el logro de un crecimiento sostenible a más largo plazo, dependerán de su capacidad para crear una demanda interior más sólida. Para ello se requerirá un mayor respeto de los derechos de los trabajadores, de manera que los sindicatos puedan negociar incrementos salariales proporcionales a la mayor productividad, y una protección social más completa por medio de programas como pensiones de jubilación y cobertura sanitaria. Tales estrategias contribuirán a corregir los “desequilibrios globales” en los flujos comerciales y financieros y a revertir las crecientes desigualdades de ingresos que se registran en muchos de estos países.

Conforme las economías industrializadas y emergentes luchan por recuperarse, existe el riesgo de dejar al margen a los países con bajos ingresos. Los pobres sufren realmente de la crisis alimentaria. Aunque los precios de los alimentos y de los productos básicos se han moderado en los mercados mundiales con la recesión global, aún se dejan sentir sus efectos: los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sugieren que los precios de los alimentos son actualmente más altos que hace un año, en plena crisis mundial de alimentos, en más del 80 por ciento de los países en desarrollo. La crisis económica, con el descenso de los ingresos, exacerbará aún más los efectos de la crisis alimentaria, afectando principalmente a los pobres de las zonas rurales y urbanas, los agricultores sin tierras, los hogares con una mujer como cabeza de familia y los que han quedado desempleados recientemente, incluyendo los trabajadores/as migrantes. Resulta absolutamente esencial mantener y mejorar los niveles de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Los presupuestos de ayuda al desarrollo, particularmente para los Países Menos Adelantados (PMA) deben mantenerse, adoptando compromisos vinculantes y estableciendo un calendario para alcanzar el objetivo fijado por la ONU de destinar el 0,7 por ciento del PIB a la AOD. Los gobiernos deben seguir prestando atención a la seguridad alimentaria y trabajar de manera conjunta para lograr una capacidad de recuperación de la agricultura a más largo plazo, con objeto de asegurarse de que los productos básicos resulten abordables para toda la población y ésta disfrute de un acceso seguro y sostenible a los alimentos.

La mayoría de los países en desarrollo y algunos emergentes siguen aplicando políticas fiscales procíclicas, porque se ven presionados por las instituciones financieras internacionales (IFI) a practicar una “disciplina fiscal” en tiempos de crisis, y ello pese a los compromisos contraídos durante la Cumbre del G20 en Londres, en abril, de asegurar que las finanzas de las IFI serían “contracíclicas”. La comunidad internacional debe apoyar los programas expansionistas de recuperación en los países en desarrollo, que resultan necesarios para evitar que la pobreza aumente aún más y contribuir a la demanda global. Los bancos

El Banco como el FMI deben dejar de imponer a los países en desarrollo y emergentes la condicionalidad que les obliga a adoptar políticas procíclicas. En su lugar, el objetivo del trabajo decente y el respeto de las normas fundamentales del trabajo deben afianzar los nuevos arreglos.

internacionales y regionales de desarrollo, así como otras agencias, pueden desempeñar un importante papel a la hora de garantizar que todas las regiones del mundo participen en el esfuerzo de recuperación. Este esfuerzo requiere tanto incrementar la ayuda financiera de las IFI y los países donantes como poner fin a la perjudicial condicionalidad de la política económica vinculada a la ayuda por parte de las IFI. Las IFI deberían ampliar sus iniciativas destinadas al alivio de la deuda y emprender reformas en la gobernanza a fin de que los países más afectados por su actuación tengan mayor peso a la hora de establecer sus políticas.

Es preciso incrementar la representación y el peso de los países más pobres en las instituciones y los procesos globales. Los gobiernos de las economías emergentes y de los países en desarrollo deben participar plenamente en las instituciones de un nuevo orden económico. En particular el Banco Mundial, cuyo mandato se centra en los países en desarrollo, ha de concederles un poder de voto, basado tanto en criterios económicos como sociales, que sea al menos equivalente al que tienen los países industrializados. El FMI requiere igualmente una reforma urgente y debería cambiar su estructura de gobernanza para incrementar la representación de los países “clientes” de bajos ingresos y de las economías emergentes, cuyo papel en la economía global ha aumentado en los últimos años. Los líderes del G20 han acordado ya destinar mayores recursos a las IFI³⁷, pero, a cambio, tanto el Banco como el FMI deben dejar de imponer a los países en desarrollo y emergentes la condicionalidad que les obliga a adoptar políticas procíclicas. Por ejemplo, los préstamos de emergencia negociados por el FMI con varios gobiernos desde octubre de 2008 incluyen subidas de los tipos de interés, reducción de salarios y pensiones, incremento de tarifas para los servicios públicos y la privatización de entidades estatales; algunos acuerdos incluyen además la obligación de efectuar reformas de la protección social que eliminarían el acceso a aquellos que no figuren entre los más vulnerables. En su lugar, el objetivo del trabajo decente y el respeto de las normas fundamentales del trabajo deben afianzar los nuevos arreglos. Organismos regionales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) deben ocupar un lugar en el G20, del mismo modo que lo ocupa la Comisión Europea (CE).

Restaurar el apoyo de la opinión pública hacia el sistema comercial mundial

El colapso del comercio mundial rige la recesión global, dado que los países más dependientes de los mercados de exportación son los que registran mayores descensos en el PIB, lo que se debe esencialmente al declive en la demanda mundial, y no a la introducción de restricciones comerciales. Cualquier intento de reducir los salarios para mantener la competitividad corre el riesgo de reducir aún más la demanda mundial, contribuyendo así a generar la deflación, por lo que debe impedirse. La respuesta correcta es una efectiva acción internacional coordinada, que tenga por objeto un aumento de la demanda, en lugar de aplicar políticas para “empobrecer al vecino”.

El comercio puede promover el crecimiento económico, la recuperación y el

El mundo entero debe proceder con la re-regulación de los mercados financieros con vistas a restaurar su legítimo papel de proporcionar créditos a la economía real, en lugar de engendrar un casino financiero global.

desarrollo, pero sólo si se dan las condiciones adecuadas. Para restaurar la legitimidad y el apoyo de la opinión pública al sistema comercial mundial y concluir la Ronda Doha de negociaciones, es necesario realizar progresos respecto al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Hace falta además que los países en desarrollo sean capaces de lograr una recuperación económica, crear empleo y garantizar su desarrollo industrial en el futuro y, cuando fuese necesario, controlar los flujos de capital a corto plazo para cumplir objetivos de desarrollo. Se requerirán igualmente medidas adicionales, incluyendo buffer stocks y mecanismos compensatorios, para proteger a los países de bajos ingresos frente a la volatilidad del mercado de productos de primera necesidad.

Punto 2: Nuevas normas para los mercados financieros mundiales

Las políticas de desregulación que condujeron a la financiarización de la economía mundial han devastado la economía real y los empleos y medios de subsistencia de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. El mundo entero debe proceder con la re-regulación de los mercados financieros con vistas a restaurar su legítimo papel de proporcionar créditos a la economía real, en lugar de engendrar un casino financiero global. Aunque los compromisos realizados en la Cumbre del G20 en Londres representan ciertos progresos, aún deben implementarse a nivel nacional. Además, estos compromisos no cubren áreas esenciales como la regulación de las pensiones, protección de créditos a los hogares y finanzas sociales. Todavía tienen que aplicarse las medidas propugnadas en el Plan de Acción de la Agrupación Global Unions (el cual se detalla en las siguientes páginas)

Restaurar la confianza, nacionalizar los bancos

Los planes de rescate a los bancos han costado entre tres y diez veces más a los contribuyentes que los paquetes de estímulo. Sin embargo, hasta la fecha no han mostrado muy buenos resultados, ya que los mercados crediticios siguen sin funcionar adecuadamente y existen considerables incertidumbres respecto al nivel de riesgo asumido por los contribuyentes y su acceso a los beneficios financieros una vez esté encarrilada la recuperación. Los gobiernos han hecho frente al problema de la insolvencia bancaria principalmente mediante la transferencia de los activos tóxicos a entidades gubernamentales, en lugar de compartir los riesgos de manera justa. Este sistema no garantiza una total transparencia ni el reconocimiento de las pérdidas por parte de los bancos que reciben asistencia, dado que depende de la voluntad de los bancos el que cooperen facilitando el acceso a sus libros contables. Además, esta opción no separará los activos “malos” de los “buenos”, ni restaurar la confianza, y únicamente servirá para empeorar el estado de las finanzas públicas. Además esta forma de “sacar de apuros” a los accionistas de los bancos equivale en realidad a efectuar transferencias de los hogares de los trabajadores a los de los más ricos del mundo, representados de forma desproporcionada entre los accionistas de las instituciones financieras. El movimiento sindical mantiene su llamamiento a la nacionalización de los bancos débiles, como la

mejor manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos de manera justa, y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia.

Reforma del sistema financiero

Los gobiernos deben corregir además el déficit democrático que ha caracterizado hasta la fecha los esfuerzos desplegados para diseñar la arquitectura financiera tras la crisis. No deben dejar la reforma del sistema financiero en manos de los expertos del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF)³⁸, los mismos expertos que crearon el sistema actual que se ha hundido ahora estrepitosamente. Además el CEF no ha colaborado hasta la fecha con los sindicatos, grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas, incluyendo la ONU y la OIT, y no cuenta con una estructura de gobernanza adecuada, con los expertos ni los recursos necesarios para hacerlo en el futuro.

La actual crisis ha revelado los límites del enfoque de “supervisión delegada”, que estipula que únicamente una parte reducida del sistema financiero (los bancos comerciales) requieren una vigilancia adecuada. Varias iniciativas posteriores a septiembre de 2008 identificaron la necesidad de revertir el enfoque de regulación ligera a las finanzas mundiales aplicado en el pasado³⁹. Ha llegado el momento de adoptar unas reglas vinculantes para asegurar el control público y supervisar todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. Proponemos el siguiente plan de ocho puntos:

PLAN DE ACCIÓN EN 8 PUNTOS DE GLOBAL UNIONS PARA LA REFORMA FINANCIERA

- 1.** Medidas contra la economía financiera “sumergida” (fondos de capital privado y productos estructurados);
 - 2.** Poner fin a los paraísos fiscales y regulatorios y crear nuevos mecanismos fiscales internacionales;
 - 3.** Garantizar un acceso justo y sostenible a la financiación internacional para los países en desarrollo;
 - 4.** Reforma del modelo comercial de banca privada para prevenir burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento;
 - 5.** Controlar la remuneración de directivos, accionistas e intermediarios financieros;
 - 6.** Proteger a las familias trabajadoras frente a los préstamos predatorios;
 - 7.** Consolidar y mejorar la rendición de cuentas, el mandato y los recursos de las autoridades supervisoras;
 - 8.** Reestructurar y diversificar el sector bancario.
- F**uente: Global Unions London Declaración a la Cumbre del G20 en Londres: www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/04/58/document_doc.html

i) Medidas contra la economía financiera “sumergida”. Los gobiernos deben asegurarse de una cobertura reguladora absoluta de todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. En particular, los fondos privados de capital (fondos especulativos y private equity) no deben quedar eximidos de una regulación aplicable a otras entidades de gestión de activos, que garantice la rendición de cuentas a los inversores, transparencia y, cuando sea necesario, la responsabilidad del empleador. Toda forma de transacción no recogida en

los estados contables en relación con los créditos deberá estar prohibida. Los productos financieros que transfieren los riesgos crediticios (como seguros en caso de impago o credit default swaps) y otros 'productos estructurados' opacos que se encuentran asegurados en los mercados deberán ser controlados y supervisados por parte de las autoridades públicas. Como norma general, las operaciones comerciales deberán estar vinculadas al beneficiario real. Las agencias de calificación de crédito deben estar debidamente reguladas para evitar conflictos de intereses en la valoración de productos e instituciones.

ii) Poner fin a los paraísos fiscales y regulatorios y crear nuevos mecanismos fiscales internacionales. El sistema fiscal global debería servir para fortalecer y no para debilitar la estabilidad financiera y la rendición de cuentas. La decisión del G20 de combatir la evasión fiscal y la elusión tributaria, incrementando la cooperación internacional respecto a los paraísos fiscales, constituye un paso adelante. Pero hace falta ir mucho más lejos. El enfoque que da la OCDE al intercambio de información también es limitado, dependiendo de las solicitudes de información en lugar de efectuarse un intercambio automático. Además, la crisis financiera ha revelado la extensión del arbitraje fiscal, que ha fomentado el crecimiento del sistema financiero sumergido: productos estructurados no regulados, fondos especulativos, "securitización" de la deuda y transacciones no recogidas en los estados contables. Los sesgos fiscales que favorecen la deuda se han combinados al arbitraje regulatorio para reducir artificialmente el coste financiero de ciertas inversiones, como los fondos de capital privado, que de otro modo sencillamente no habrían resultado sostenibles.

iii) Garantizar un acceso justo y sostenible a la financiación internacional para los países en desarrollo. Los países en desarrollo han de tener acceso a términos de concesión de créditos proporcionales a sus necesidades y su capacidad de pago. Las medidas incluyen activar el programa de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la FMI, acelerar la cooperación monetaria regional, y re-dirigir los flujos de capital de los países que registran un superávit en la balanza de pagos, incluyendo sus Fondos de Riqueza Soberana, hacia objetivos de desarrollo.

iv) Reforma del modelo comercial de banca privada para prevenir burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento. Las normas de adecuación del capital – la cantidad de capital que los bancos deben tener en reserva para colateralizar la actividad crediticia – deben quedar más vinculados al crecimiento de las provisiones en activos del banco y al nivel de riesgo experimentado por dichos activos. Esto evitaría que los bancos se expongan a excesivos riesgos de activos. También contribuiría a orientar la asignación de activos hacia objetivos socialmente aceptables y facilitaría el control de la inflación en el precio de los activos por parte de los bancos centrales.

v) Controlar la remuneración de directivos, accionistas e intermediarios financieros. Los sistemas de remuneración deben regularse de forma legal para que reflejen y promuevan el rendimiento económico, social y medioambiental a largo plazo y permitan a las empresas asignar los beneficios

a sus reservas para la reinversión en activos productivos. En la remuneración de los cargos directivos y financieros debe establecerse un tope, en línea con los salarios y las pensiones de los trabajadores y, en el caso de los servicios financieros, vincularlos a unas prácticas responsables de ventas y concesión de créditos. Debería prohibirse el cobro de primas y otros beneficios relacionados con el desempeño durante cinco años. Ha de evitarse que los accionistas puedan consumir toda la riqueza de las empresas durante los períodos de crecimiento por medio de dividendos y programas de readquisición, que dejan a las empresas con hojas de balance sin suficiente capitalización en los momentos de desaceleración económica. En particular el modelo insostenible de compraventas apalancadas de los private equity ha hecho peligrar millones de puestos de trabajo.

vi) Proteger a las familias trabajadoras frente a los préstamos predatorios.

Los gobiernos deben tomar medidas para incrementar la seguridad de los préstamos para las familias trabajadoras, exigiendo transparencia en los contratos financieros (vivienda, tarjetas de crédito, seguros), acceso a un recurso efectivo, proximidad de los servicios y asequibilidad (topes en los tipos de interés y los recargos). La remuneración y los sistemas de incentivos de los bancos y otros suministradores de créditos deberán estar diseñados para garantizar unas prácticas comerciales y crediticias responsables que sirvan los intereses de los clientes.

vii) Consolidar y mejorar la rendición de cuentas, el mandato y los recursos de las autoridades supervisoras.

Los gobiernos deben tomar medidas para poner fin al enfoque fragmentado a la regulación financiera, que actualmente se divide en función de la actividad comercial y la jurisdicción nacional. Deberá contarse con una consolidación supranacional cuando sea preciso, particularmente en Europa. Las autoridades supervisoras deberán disponer de suficientes poderes de aplicación y de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. En particular, su mandato deberá ampliarse para cubrir la supervisión de la inflación en el precio de activos. En sus estructuras de gobernanza debe contarse con la participación de los sindicatos. Además, el marco de supervisión, incluyendo “colegios de supervisores”, deberá facilitar la cooperación de las autoridades financiera con los sindicatos y otras estructuras representativas de los empleadores en el lugar de trabajo dentro del sector financiero: por ej., comités de empresa y acuerdos marco internacionales establecidos entre las Federaciones Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

viii) Reestructurar y diversificar el sector bancario. Se requieren diversos modelos de negocios y formas legales para contribuir a establecer unos servicios financieros nacionales equilibrados y robustos que beneficien a la economía real y que cubran las necesidades de las familias trabajadoras. Los gobiernos deben promover modelos alternativos a la banca comercial, como las uniones de crédito, los bancos cooperativos, las mutuas de seguros y otros servicios financieros públicos y centrados en las comunidades. Deben tomarse medidas además para asegurarse de que no vuelvan a crearse grandes conglomerados que sean “demasiado grandes como para caer”, o que combinen distintos tipos de negocio: banca, seguros, banco de inversiones, etc. La reestructuración

La “flexibilización” de los mercados del trabajo que ha tenido lugar en prácticamente todas las economías en los últimos 25 años ha incrementado el riesgo de una deflación salarial que contribuye a profundizar la crisis debido a los recortes en el poder adquisitivo y el aumento de la inseguridad.

deberá realizarse respetando las reglas más estrictas del diálogo social y mitigar su impacto sobre el empleo.

Proteger las pensiones de los trabajadores

La crisis ha revelado el peligro de una inversión ilimitada de las pensiones de los trabajadores en el sector financiero “encubierto”, por lo que es necesario tomar medida para proteger a los trabajadores y trabajadoras cubiertos por planes de pensiones prefinanciados. El valor de los fondos de pensiones de los países de la OCDE ha descendido más de 3,3 billones de dólares estadounidenses, un 20 por ciento en términos reales, durante 2008, a causa de la disminución de valor de los valores de renta variable, los activos de renta fija, los fondos especulativos y los productos estructurados. El impacto inmediato de la crisis se hará sentir especialmente para aquellos que están cerca de la edad de la jubilación, con pensiones en regímenes no protegidos de “contribuciones definidas”, donde el nivel final de jubilación depende del rendimiento obtenido por el fondo de pensiones. Los gobiernos han de tomar medidas además para garantizar una jubilación adecuada para los trabajadores y trabajadoras con sistemas de pensiones basados en la capitalización, incluyendo asegurarse de que los empleadores asuman también su parte en cuanto a los riesgos y la financiación de las pensiones, y para reforzar los regímenes de pensiones con garantía del Estado y la regulación de la inversión de fondos de pensiones en general.

Punto 3: Poner fin a la deflación salarial y combatir la crisis de justicia distributiva

La “flexibilización” de los mercados del trabajo que ha tenido lugar en prácticamente todas las economías en los últimos 25 años ha incrementado el riesgo de una deflación salarial que contribuye a profundizar la crisis debido a los recortes en el poder adquisitivo y el aumento de la inseguridad. Los gobiernos no pueden repetir el error cometido en los años 1930 y permitir una deflación salarial competitiva. En lugar de adoptar políticas que debiliten la protección de los trabajadores e incrementen la precariedad del trabajo, los gobiernos deben asegurarse de que se establezcan unos valores mínimos en los mercados de trabajo, para prevenir una espiral descendente de deflación en ingresos y precios. Deben tomar medidas para proteger los derechos básicos de los trabajadores y las trabajadoras y la ampliación de la negociación colectiva, y promover la reconstrucción de instituciones que contribuyan a distribuir los ingresos y la riqueza de forma más equitativa. Los salarios mínimos deben ser lo suficientemente elevados para permitir que los trabajadores y sus familias dispongan de condiciones de vida decentes, a fin de prevenir que aumente aún más el número de los pobres que trabajan. Las mujeres representan la mayor parte de los trabajadores con condiciones de trabajo más precarias, por lo que lograr la equidad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer en el empleo ha de convertirse en una prioridad en el programa político nacional e internacional.

Antes de la crisis, las desigualdades salariales habían aumentado tanto entre

Las regulaciones básicas del mercado de trabajo —como salarios mínimos, horas de trabajo máximas, prestaciones en caso de pérdida del empleo y limitaciones en el recurso a contratos de duración determinada— resultan esenciales para proteger a los trabajadores de abusos.

los países como dentro de cada nación. El aumento de los salarios se quedó atrás respecto a las tasas de crecimiento más importantes en la productividad en dos tercios de los países más ricos que componen la OCDE⁴⁰ y la proporción de los salarios en los ingresos nacionales descendió en todos los países para los que se dispone de datos. A fin de contrarrestar las desigualdades existentes, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo económico que resulte sostenible medioambientalmente y que garantice un crecimiento equilibrado de los salarios reales, en línea con los aumentos de la productividad. Se necesita asimismo un sistema fiscal más justo, que combata las desigualdades mediante una imposición sobre el capital y no sobre el trabajo.

En la mayoría de los países en desarrollo, las instituciones del mercado de trabajo son aún más débiles que en los países industrializados y una gran proporción de la fuerza laboral está pluriempleada en la “economía informal”, donde no gozan de ninguna protección. Las regulaciones básicas del mercado de trabajo —como salarios mínimos, horas de trabajo máximas, prestaciones en caso de pérdida del empleo y limitaciones en el recurso a contratos de duración determinada— resultan esenciales para proteger a los trabajadores de abusos, del mismo modo que el respeto de las normas fundamentales del trabajo para que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente a fin de mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Las IFI no deberían promover una regulación aún mayor del mercado de trabajo en los países en desarrollo durante la actual crisis, puesto que sólo contribuiría a exacerbar la difícil situación de los trabajadores, especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores/as en los países en desarrollo no cuentan con programas de apoyo a los ingresos a los que acogerse. Las IFI deberían trabajar conjuntamente con la OIT y apoyar sus esfuerzos para promover la creación de un empleo seguro con salarios adecuados, protección social y respeto de los derechos.

A más largo plazo, deberían recrearse las estructuras tripartitas para la consulta económica y social y la planificación política, que sirvieron de trampolín para los 30 años de alto crecimiento económico y para mejorar el nivel de vida durante la postguerra. Implicando a representantes de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones que determinan el empleo y el crecimiento económico no sólo resulta coherente con los principios democráticos, sino que además es beneficioso económicamente. El modelo alternativo neoliberal nos condena a repetir los errores de los años 1920 y 1990, y a mantener los niveles de creciente desigualdad que desembocaron en la inestabilidad financiera y en última instancia produjeron el crash de la bolsa.

Punto 4: Establecer las bases de un acuerdo internacional para mitigar el cambio climático

Los líderes del mundo y de los gobiernos deben asegurarse de que las medidas urgentes necesarias para hacer frente al cambio climático se vean retrasadas o desbaratadas a causa de la crisis. Más bien, tal como reclama el presente informe, los gobiernos deben aprovechar la respuesta global fiscal coordinada

El nuevo acuerdo sobre cambio climático debe pedir a los gobiernos que consulten, planifiquen y apliquen una estrategia de “transición justa”, destinada a proteger a los más vulnerables de los riesgos asociados al cambio climático y de las consecuencias de las posibles medidas de adaptación o mitigación.

a la crisis para avanzar en el “programa de la economía verde”, preparando así el terreno para que en Copenhague se alcance un ambicioso acuerdo sobre cambio climático.

Está ahora generalmente reconocido que el coste global del cambio climático, en caso de dejarse las cosas tal como están, equivaldría a la pérdida del 5 por ciento de la producción global “ahora y para siempre”. Si se tiene en cuenta una variedad más amplia de riesgos e impactos, los efectos netos del daño podrían superar el 20 por ciento. En contraste, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para paliar sus peores efectos, es decir del 85 por ciento para el año 2050, en relación con los niveles del 1990 y del 25-40 por ciento para el año 2020 en los países que figuran en el Anexo I del Protocolo de Kyoto, podría limitar las pérdidas al 1 por ciento de la producción anual cada año. Así pues, aunque el hecho de tomar medidas para combatir el cambio climático alterará la actividad económica y el empleo, no hacerlo tendría consecuencias catastróficas para los empleos sostenibles, la sociedad y la economía mundial. Los gobiernos deben realizar compromisos vinculantes de reducción de sus emisiones para alcanzar estos objetivos, en base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en función del desarrollo económico y social de cada país.

Necesitamos enviar un mensaje firme sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo en Copenhague. Dicho acuerdo ha de incluir objetivos ambiciosos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, así como una acción eficaz para lograr reducciones de las emisiones o incrementos controlados para garantizar un desarrollo bajo en carbono en los países en desarrollo.

Los gobiernos deben reconocer que alcanzar dicho acuerdo sobre cambio climático depende del establecimiento de un consenso político amplio y sostenible sobre los objetivos, y sobre los medios para alcanzarlos. El acuerdo ha de mostrar que los gobiernos firmantes reconocen el impacto social y económico de su implementación, incorporando una estrategia clara para hacerles frente dado que, hasta la fecha, no se han abordado debidamente los retos y los beneficios sociales para el empleo. Además, el nuevo acuerdo sobre cambio climático debe pedir a los gobiernos que consulten, planifiquen y apliquen una estrategia de “transición justa”, destinada a proteger a los más vulnerables de los riesgos asociados al cambio climático y de las consecuencias de las posibles medidas de adaptación o mitigación. Estas estrategias “de transición” requieren entre otros elementos, que se establezcan consultas con los sindicatos, las empresas y la sociedad civil, además de políticas de protección social y diversificación económica.

Los países desarrollados deberán aportar apoyo financiero y de otro tipo a los países más pobres, para permitirles hacer frente a los retos del cambio climático, incluyendo la contribución de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El mundo debe estar dispuesto a mostrar liderazgo y ambición y a:

- Realizar inversiones a gran escala y con mano de obra intensiva en infraestructuras verdes, como la eficiencia energética, edificios, energía renovable y transporte público.
- Desarrollar programas de formación y desarrollo de capacidades para que los trabajadores/as puedan acceder a “empleos verdes” de calidad. Estos programas deberán orientarse particularmente a comunidades vulnerables, como las afectadas por la actual crisis económica.
- Comprometerse a alcanzar objetivos ambiciosos a corto y medio plazo para una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Promover a escala internacional y nacional una “transición justa” a una economía con bajas emisiones en carbono y socialmente justa, y apoyar la posición presentada en el texto de negociación de la CMNUCC en junio 2009 para la COP15 en Copenhague.
- Reconocer el papel de los sindicatos para alcanzar un consenso y crear las condiciones adecuadas para la gran transición que debe tener lugar.

Punto 5: Una gobernanza económica mundial eficaz y responsable

En 1944 los principales países del mundo se reunieron en Bretton Woods para establecer nuevos arreglos financieros globales que apoyasen la recuperación económica. Necesitamos ahora mostrar una ambición mucho mayor: el cambio ha de ir más allá de la regulación financiera. Esta crisis ha revelado serias faltas de solidez en los mecanismos para la gobernanza de la economía global. Aunque no hay un modelo básico para una gobernanza mundial óptima, los gobiernos pueden empezar por identificar los requisitos de la coherencia global en áreas como el medio ambiente, las finanzas, la asistencia al desarrollo, la migración, el trabajo, la salud y la energía, donde es claramente evidente que la gobernanza nacional por sí sola no basta y que se requiere una nueva arquitectura institucional en un “gran trato global”. Para que progrese la agenda de negociaciones comerciales, es necesario incluir un pilar social mucho más firme para anticipar y suavizar las alteraciones en el empleo que ocasionará una competencia más intensa probablemente. El proceso del G20 contiene algunos elementos de este tipo, pero sigue estando marcadamente inclinado hacia cuestiones financieras. La economía real, el trabajo decente y la reducción de la pobreza están siendo tratados de manera marginal en las discusiones. Además, algunos países que representan un tercio de la población mundial no están representados en la mesa de negociación por lo que no tienen la posibilidad de influir en las labores del G20.

De hecho, deben llevarse adelante los resultados de la “Conferencia de la ONU al más alto nivel sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos sobre el desarrollo” para desempeñar un papel en las nuevas estructuras de gobernanza y asesoramiento a las organizaciones internacionales.

La adopción del histórico Pacto Mundial para el Empleo por parte de gobiernos, sindicatos y empleadores, en la Conferencia Internacional del Trabajo anual de la OIT celebrada en junio de 2009, proporciona una pauta realista y factible para la recuperación y la reforma económica.

La adopción del histórico Pacto Mundial para el Empleo por parte de gobiernos, sindicatos y empleadores, en la Conferencia Internacional del Trabajo anual de la OIT celebrada en junio de 2009, proporciona una pauta realista y factible para la recuperación y la reforma económica. “El Pacto de la OIT sitúa empleo e ingresos en el núcleo de los esfuerzos por la recuperación económica y establece referencias clave para una nueva economía global. Puestos de trabajo, derechos de los trabajadores y trabajadoras, protección social, servicios públicos de calidad y sostenibilidad tienen que estar en el centro de la elaboración de políticas mundiales, dentro de una ruptura significativa con el fracasado radicalismo de libre mercado que ha generado la crisis.

El Pacto proporciona orientación para que gobiernos y empleadores mantengan y creen empleo, reconociendo la importancia de los “empleos verdes” tanto para la recuperación económica como para abordar el cambio climático. Se pone de relieve el papel crucial de las negociaciones tripartitas entre gobiernos, sindicatos y empleadores, así como el diálogo social y la negociación colectiva, conjuntamente con la necesidad de evitar espirales salariales deflacionistas y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. También se hace hincapié en la importancia de los planes públicos para la creación de puestos de trabajo, como por ejemplo el desarrollo de infraestructuras, así como las ayudas para los desempleados y la formación y el desarrollo de capacidades. En el Pacto se otorga especial atención a la necesidad de una gobernanza global eficaz y coherente, lo cual exige que, en el futuro, el sector financiero esté al servicio de las necesidades de la economía real para apoyar el trabajo decente. En particular, los gobiernos de los países en desarrollo necesitan el espacio político necesario para invertir en el futuro, en vez de ser forzados a entrar en políticas fiscales “pro-cíclicas” que suelen desembocar en recortes brutales de puestos de trabajo e ingresos.

Por otra parte, la Cumbre del G20 de Londres respaldó la preparación de los principios de una Carta mundial para la actividad económica sostenible, que constituya un conjunto de principios generales de política económica, financiera, social, medioambiental y de desarrollo haciendo hincapié en la rendición de cuentas y la responsabilidad colectiva como piedras angulares de la actividad económica. En este contexto, las normas del trabajo y sociales constituyen uno de los elementos clave de los principios generales para prevenir que la crisis actual vuelva a repetirse. Es esencial que los elementos del trabajo decente en materia de empleo, normas del trabajo, protección social y diálogo social cuenten con un enérgico apoyo en el contexto de los debates de la Carta del G20.

Evidentemente, los gobiernos deben iniciar el trabajo, pero no pueden dejarlo luego en manos de banqueros y funcionarios de los ministerios de finanzas para que se reúnan a puerta cerrada. Los sindicatos están dispuestos a participar de forma constructiva en este proceso y piden a los gobiernos que se les permita sentarse en la mesa de negociación. Los sindicatos deben participar plenamente en las nuevas estructuras de gobernanza y asesoramiento de las organizaciones internacionales, como ocurre ya en la OCDE. En línea con el mandato acordado en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una

globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2008, así como el Pacto Mundial para el Empleo, la OIT debe constituir un elemento central de una nueva arquitectura multilateral, para que pueda responder de manera eficaz a la actual crisis en una globalización impulsada por los mercados situando el empleo, las prioridades sociales y la promoción del trabajo decente en el núcleo mismo de la toma de decisiones.

Los sindicatos llevan sus reivindicaciones al FMI y el Banco Mundial en Washington, enero de 2009

Una delegación de alto nivel integrada por 80 representantes sindicales del mundo entero se reunió, en enero de 2009, en Washington con el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y con el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, así como con otros altos ejecutivos y funcionarios de ambas organizaciones para reclamar la aplicación de medidas inmediatas para hacer frente a la recesión y que se introduzca una regulación global efectiva con objeto de garantizar la estabilidad económica mundial en el futuro. La delegación, encabezada por la Presidenta de la CSI, Sharan Burrow, y su Secretario General, Guy Ryder, incluyó dirigentes sindicales y especialistas en economía de diversas centrales sindicales nacionales, Federaciones Sindicales Mundiales y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE.

Entre los temas discutidos se contaron las políticas de estímulo fiscal, los préstamos de emergencia y la condicionalidad de dichos préstamos. A la CSI le preocupan particularmente algunas de las condiciones de un acuerdo crediticio que el FMI acaba de concluir con el autoritario gobierno de Belarús. A cambio de un crédito de emergencia por valor de 2.460 millones de dólares estadounidenses, el gobierno de Belarús, que ha sido condenado por la OIT por violar los derechos fundamentales de los trabajadores, se compromete a aplicar moderaciones salariales en todo el sector público, incrementar los precios de los servicios públicos y llevar a cabo un proceso de privatización. Se recomienda además a Belarús que reforme su red de seguridad social y que concentre la atención hacia "los grupos más vulnerables", lo que podría derivar en una protección social reducida para numerosos trabajadores dado que no pueden expresarse ni defenderse libremente a causa de la represión ejercida por el régimen Lukashenko contra los sindicatos.

Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial, y Dominique Strauss-Kahn, Director General del FMI se han comprometido a reforzar los programas sociales para los trabajadores afectados por la crisis económica y a ampliar las medidas sobre las normas fundamentales del trabajo. Los compromisos fueron adoptados al concluir dos días de reuniones organizadas con una delegación sindical internacional compuesta de 80 miembros. El Director General del FMI, Strauss-Kahn, junto con altos cargos del Fondo comunicaron a la delegación que el FMI no había previsto la amplitud de la actual crisis ni tampoco el impacto que está teniendo sobre los trabajadores y trabajadoras, y que aprecia la experiencia y pericia del movimiento laboral, que llevaba años advirtiendo de los peligros que determinados instrumentos financieros extravagantes y no regulados planteaban para la economía global.

Los sindicatos están dispuestos a participar de forma constructiva en este proceso y piden a los gobiernos que se les permita sentarse en la mesa de negociación. Los sindicatos deben participar plenamente en las nuevas estructuras de gobernanza y asesoramiento de las organizaciones internacionales, como ocurre ya en la OCDE.

Los sindicatos en la Cumbre del G20 en Londres, abril de 2009

Los dirigentes sindicales de todo el mundo se dieron cita en Londres, en abril de 2009, para defender sus argumentos ante la cumbre del G20 sobre la crisis económica mundial. Las docenas de reuniones que, en los respectivos países, los líderes sindicales nacionales han venido celebrando con los jefes de gobiernos desde principios de la semana pasada tendrán un brillante colofón con las reuniones previstas el martes con el Primer ministro británico, Gordon Brown, anfitrión de la cumbre, y el miércoles con el Primer ministro australiano, Kevin Rudd. El lunes, en vísperas de la cumbre, los líderes sindicales mantuvieron conversaciones con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el presidente del Gobierno español, José Luis Zapatero y el ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrueck.

Asimismo, decenas de miles de personas, haciendo frente al frío y la lluvia, se lanzaron a las calles de Londres durante el fin de semana, en una multitudinaria manifestación de la sociedad civil que contó con la presencia de la presidenta de la CSI, Sharan Burrow, y la coorganización del Trades Union Congress (TUC) británico, encargado, junto con la CSI y la TUAC, de coordinar el programa de reuniones de Londres.

Las presiones sindicales surtieron cierto efecto. En el comunicado de la Cumbre de Londres del G20 se da al empleo y a las cuestiones sociales mayor prioridad dentro del orden del día que en la Cumbre del G20 de noviembre de 2008 y que en los anteriores borradores de dicho comunicado. La OIT participará en el seguimiento de la Cumbre, habiéndosele solicitado que evalúe las medidas tomadas por el G20 con respecto al empleo. La Cumbre estuvo asimismo a favor de seguir discutiendo una "carta", según propuesta de la Canciller Merkel y otras personas, con el fin de llegar a un nuevo consenso mundial sobre los valores y principios clave de una actividad económica sostenible.

Consejo de la Agrupación Global Unions – trabajar para la recuperación

Los dirigentes sindicales de todo el mundo se dieron cita en Londres, en abril La publicación del Consejo de la Agrupación Global Unions de mayo de 2009 recoge las estrategias alternativas propuestas por el movimiento sindical para la economía mundial. Estas estrategias alternativas giran alrededor de un objetivo: la vuelta al empleo y un plan de recuperación basado en los valores humanitarios. La Agrupación Global Unions sostiene que la crisis económica exige mirar con ojos nuevos el motor que mueve a la economía y las políticas mundiales y hace hincapié en los efectos devastadores de la desregulación financiera sobre el empleo.

El informe esboza los diversos ámbitos de cooperación de la Agrupación Global Unions y muestra cómo, en un momento de crisis, el movimiento sindical internacional cierra filas y une su fuerza política y laboral en diversos ámbitos, como el control democrático de la economía; el compromiso con la calidad de los servicios públicos y la educación, poner un alto al avance de las desigualdades en materia de ingresos en el marco de la economía mundial y la vital necesidad de rediseñar la arquitectura financiera.

En resumen, los artículos que componen la publicación de la Agrupación Global Unions: Getting the world to WORK – Global Unions Strategies for Recovery (Cómo hacer posible la vuelta al empleo en todo el mundo – las estrategias de la Agrupación Global Unions a favor de la recuperación) muestran que el movimiento sindical exige un golpe de timón para cambiar de rumbo y una escisión con la codicia, el egoísmo y las desigualdades del pasado, además de exhortar a los gobiernos del mundo a que pongamos a las personas primero para hacer posible el cambio.

El siguiente paso es velar porque se preste mayor atención en el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo y en proporcionar una protección social adecuada. Simplemente no podemos permitir que las desigualdades y la pobreza sigan aumentando entre los países como dentro de cada nación como ha ocurrido en las dos últimas décadas.

La creciente crisis global de empleo, los desequilibrios de las instituciones económicas y sociales y los mercados financieros no regulados representan una amenaza para el logro del trabajo decente para todos y una sociedad socialmente más justa. Aun cuando algunas cifras prevén una ligera recuperación en 2010, es imperativo tener en cuenta que el período actual de desempleo contrasta con todo lo que el mundo del trabajo ha conocido hasta ahora. La Gran Depresión se centró esencialmente a los Estados Unidos, mientras que la crisis económica actual ha demostrado afectar a los trabajadores, al presupuesto y al déficit públicos así como a las empresas a escala mundial. El siguiente paso es velar porque se preste mayor atención en el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo y en proporcionar una protección social adecuada. Simplemente no podemos permitir que las desigualdades y la pobreza sigan aumentando entre los países como dentro de cada nación como ha ocurrido en las dos últimas décadas. “Pongamos a las personas primero” no es un mero eslogan, es una exigencia de los trabajadores (hombres y mujeres, jóvenes y mayores, las familias y los niños de nuestra nueva generación) dirigida a los líderes mundiales para que sepan que las desigualdades ya no son tolerables ni en los mercados financieros, ni en los mercados de comestibles, ni en los mercados de la vivienda.

Los sindicatos en la Cumbre del G20 en Pittsburgh, septiembre de 2009

La tercera Cumbre del G20 sobre la crisis económica y financiera mundial tendrá lugar en Pittsburgh, Pensilvania, los días 24 y 25 de septiembre de 2009. Por consiguiente, la CSI, TUAC y la Agrupación Global Unions, conjuntamente con la AFL-CIO preparan la presencia de una nutrida delegación de dirigentes sindicales de países del G20 para reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno, que asistirán a la tercera reunión de los líderes del G20 para discutir la situación económica mundial.

Los objetivos sindicales anunciados para Pittsburgh incluyen el seguimiento del empleo, las cuestiones sociales y el papel del Pacto Global de Empleo de la OIT; la carta mundial para una actividad económica sostenible; el cambio climático y un nuevo trato verde; la aplicación y profundización de los acuerdos de la Cumbre de Londres sobre la regulación financiera y los programas actuales de préstamos del FMI así como la falta de coherencia en las promesas formuladas en la Cumbre de Londres para financiar el gasto público contracíclico en los países en desarrollo.

Yendo más lejos de la respuesta inmediata a la crisis, cuando nuestras economías empiecen a recuperarse no podrá volverse a la situación anterior, “como si nada hubiese pasado”. En lugar de planificar “estrategias de salida” que no sean sino una versión aún más brutal de las políticas que fracasaron en el pasado, es necesario establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, que resulte eficiente económicamente, socialmente justo y medioambientalmente sostenible. Este modelo ha de reequilibrar la

economía: la economía financiera y la real; los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el capital; los países con excedente y con déficit comercial así como los países industrializados y en desarrollo. Ante todo, debe poner fin a las políticas que han generado enormes desigualdades tanto entre los países como dentro de cada nación en el transcurso de las dos últimas décadas, lo que requiere un cambio de paradigma en la formulación de las políticas, que realmente ponga a las personas en primer término.



Notas

1. FMI: Today's World Economic Outlook Update, julio de 2009
2. Stiglitz: Capitalist Fools (Enero 2009); Rudd: The Global Financial Crisis (Feb 2009)
3. TUAC (2007): Towards Fair Globalisation, Trade Union Statement to G8 Heiligendamm Summit, 6-8 Junio de 2007
4. TUAC (2003): Trade Union Statement to the Evian G8 Economic Summit and OECD Ministerial Council, Abril-junio de 2003
5. Instituto Internacional de Estudios Laborales (2008): Informe sobre el Mundo del Trabajo - Desigualdades de renta en la Era de la Finanzas Global, OIT, Ginebra
6. OIT: El costo de la coacción, 2009
7. FMI: Perspectivas de la Economía Mundial al día, julio de 2009
8. OIT: Tendencias mundiales del empleo, 2009
9. Stiglitz (mayo de 2009): La primavera de los zombies, Project Syndicate
10. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: The global financial crisis – impact, responses and way forward, junio de 2009
11. AFL-CIO: U.S. Unemployment Rate now 9.4 Percent por Tula Connell, 8 de junio de 2009
12. OIT (junio de 2009): The global economic crisis: Labour market impacts and policies for recovery in Asia, Asia-Pacific working paper series
13. http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--es/WCMS_108099/index.htm
14. OIT (junio de 2009): The global economic crisis: Labour market impacts and policies for recovery in Asia, Asia-Pacific working paper series
15. OIT (junio de 2009): The global economic crisis: Labour market impacts and policies for recovery in Asia, Asia-Pacific working paper series
16. OIT/IIEL: Políticas globales para una crisis global, Reseña de políticas, 2009
17. TUAC: Pension security must be central to global recovery and sustainable economic growth, say TUAC's pension experts, 10 de Julio de 2009
18. Oxfam Internacional: Paying the price for the economic crisis, documento de debate, marzo de 2009
19. OCDE: Frequently Asked Questions – Impact of crisis on employment, http://www.oecd.org/faq/0,3433,en_2649_201185_42061569_1_1_1_1,00.html
20. Oxfam Internacional: Paying the price for the economic crisis, documento de debate, marzo de 2009
21. OIT/IIEL: Políticas globales para una crisis global, Reseña de políticas, 2009
22. Banco Mundial, 2008
23. Aid Watch & CONCORD: Lighten the Load – in a time of crisis, European aid has never been more important, 2009
24. Banco Mundial: Migration and Development Brief 10, Julio de 2009
25. Oxfam Internacional: Paying the price for the economic crisis, documento de debate, marzo de 2009
26. OIT/IIEL: Políticas globales para una crisis global, Reseña de políticas, 2009
27. Khatiwada (2009): Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis: A review, IIEL, OIT
28. Khatiwada (2009): Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis: A review, IIEL, OIT
29. <http://www.canadianlabour.ca/action-center/get-real-its-economy>
30. FMI, IMF Survey, 24 de abril de 2009: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/>

so/2009/CAR042409A.htm

31. CTUWS: Impacts of the Global Financial Crisis on Egyptian Workers, the third report, Mayo de 2009
32. FMI, Fiscal Policy for the Crisis, 29 de diciembre de 2008
33. OIT-IIEL (ed), La crisis financiera y económica: Una respuesta basada en el trabajo decente, Ginebra 2009, p. 8.
34. Perspectivas de las pensiones privadas en la OCDE, 2008.
35. OIT - Foro de Diálogo Mundial sobre el Impacto de la Crisis Financiera en los Trabajadores del Sector Financiero, 24-25 de febrero de 2009
36. CSI, Desigualdad de género en el mercado laboral: Visión general de las tendencias y progresos mundiales, 2009
37. G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Communiqué - 14 de marzo de 2009
38. El "Foro de Estabilidad Financiera", creado en 1999, fue rebautizado "Consejo de Estabilidad Financiera" por la Cumbre del G20 en Londres en abril de 2009.
39. Modernising the American Financial Regulatory System, Congressional Oversight Panel (COP), Special Report on Regulatory Reform, enero de 2009: <http://cop.senate.gov/documents/cop-012909-report-regulatoryreform.pdf>; Principles for a New Financial Architecture, Stiglitz, Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, enero de 2009; <http://www.un.org/ga/president/63/commission/newfinancialarchitecture.pdf>
40. "Growing Unequal", OCDE, octubre de 2008

Bibliografía seleccionada

Aid Watch & CONCORD: Lighten the Load – in a time of crisis, European aid has never been more important, 2009

El Banco Mundial: Social Safety Nets: Lessons from rich and poor countries by Martin Ravallion, Policy Research Working Paper 4763, The World Bank Development Research Group, October 2008

El Banco Mundial: Migration and Development Brief 10, Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, July 2009

BBC News, The downturn in facts and figures, US sub prime, 21 November 2008

Congressional Oversight Panel (COP): Modernising the American Financial Regulatory System, Special Report on Regulatory Reform, January 2009

Confederación Sindical Internacional (CSI): La “Declaración De Washington” de la Agrupación Global Unions, Declaración Sindical ante la “Cumbre del G20 Sobre la Crisis”, Noviembre de 2008

Confederación Sindical Internacional (CSI): (Des)igualdad de género en el mercado laboral: Visión general de las tendencias y progresos mundiales, Marzo de 2009

Confederación Sindical Internacional (CSI): La Declaración a la Cumbre del G20 en Londres, Agrupación Global Unions – Declaración de Londres al G20, Abril de 2009

Confederación Sindical Internacional (CSI): La Declaración a la Cumbre del G20 en Pittsburgh, Agrupación Global Unions – Declaración de Pittsburgh al G20, Septiembre de 2009

Consejo Global Unions (CGU): Getting the World to WORK: Global Union Strategies for Recovery, May 2009

G20 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Communiqué, 14 March 2009

Global Financial Crisis Unions’ Watch: trade union statements and reports in the period from July 2008 to September 2009: <http://www.ituc-csi.org/financialcrisis>

Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook Update, July 2009

Fondo Monetario Internacional (FMI): IMF Survey Magazine 2008-2009
I

Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL): Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis: A review, Discussion paper DP/196/2008 by Sameer Khatiwada, Geneva 2009

Organización Internacional del Trabajo (OIT) & Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL): A global policy package to address the global crisis, Policy Brief, Geneva, 2008

Organización Internacional del Trabajo (OIT) & Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL): Informe sobre el trabajo en el mundo 2008. Desigualdades de renta en la era de la finanza global, 2008

Organización Internacional del Trabajo (OIT) & Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL): The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Response, Geneva, 2009

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Informe I(B) - Informe del Director General: El costo de la coacción, 2009

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Tendencias mundiales del empleo, enero de 2009

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Parar recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo, Junio 2009

Organización Internacional del Trabajo (OIT): The global economic crisis: Labour market impacts and policies for recovery in Asia, Asia-Pacific Working Paper Series by Gyorgy Sziraczki, Phu Huynh and Steven Kapsos, Regional Office for Asia and the Pacific, June 2009

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Growing Unequal: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, October 2008

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Private Pensions Outlook 2008, February 2009

Oxfam International: Paying the price for the economic crisis, Discussion Paper, March 2009

Rudd, Kevin: The Global Financial Crisis, The Monthly Essays, February 2009

Stiglitz, Joseph E.: Capitalist Fools, Vanity Fair, January 2009

Stiglitz, Joseph E.; The Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System: Principles for a New Financial Architecture, January 2009

Stiglitz, Joseph E.: The Spring of the Zombies, Project Syndicate, May 2009

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC): Trade Union Statement to the Evian G8 Economic Summit and OECD Ministerial Council, April-June 2003

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC): Towards Fair Globalisation, Trade Union Statement to G8 Heiligendamm Summit, 6-8 June 2007

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC): Dealing with pension governance, market & political risks in times of crisis, TUAC background paper, July 2009

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC): Situar el empleo y la justicia en el centro de la recuperación: Papel del G8, Declaración de la Agrupación Global Unionsa la Cumbre del G8 – Italia, Julio de 2009

United Nations Economic and Social Council: The global financial crisis – impact, responses and way forward, Economic Commission for Africa, E/ECA/COE/28/6, Egypt, June 2009

Editor responsable:
Guy Ryder, Secretario General

CSI

5 Blvd du Roi Albert II, Bte 1, 1210-Bruselas, Belgica
Tel: +32 2 2240211, Fax: +32 2 2015815
E-Mail: press@ituc-csi.org • Web: <http://www.ituc-csi.org>

Redactora en Jefe: **Helle Damgaard Nielsen**
Compaginación: **Vicente Cepedal**